

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

41ª REUNIÓN — 20ª SESIÓN ORDINARIA — 13 DE NOVIEMBRE DE 1991

Presidencia del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor LUIS A. J. BRASESCO,

del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,
doctor JUAN RAMÓN AGUIRRE LANARI,

y del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
doctor JUAN CARLOS ROMERO

Secretarios: señores HUGO RAÚL FLOMBAUM y ÁNGEL LEÓNIDAS ABASTO

Prosecretarios: señores MARIO DÉLFOR FASSI y DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan Ramón
BENÍTEZ, Alfredo L.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
COSTANZO, Remo José
FIGUEROA, José Oscar
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GROSSO, Edgardo Roger M.
GURDULICH de CORREA, Lilitana
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis Agustín
LOSADA, Mario Aníbal
LUDUEÑA, Felipe
MAC KARTHY, César
MALIHARRO de TORRES, Margarita
MARÍN, Rubén Hugo
MAZZUCCO, Faustino M.
MOLINA, Pedro E.

NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
RUBEO, Luis A.
SAADI de DENTONE, Alicia
SAMUDIO GODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado
TRILLA, Juan
VACA, Eduardo P.
VELÁZQUEZ, Héctor

AUSENTES, CON AVISO:

JUÁREZ, Carlos A.
ROMERO FERIS, José A.

EN COMISION:

AMOEDO, Julio A.
BITTEL, Deolindo F.
MENEM, Eduardo
SOLARI YRICOYEN, Hipólito

SUMARIO

1. **Manifestaciones en minoría.** (Pág. 3936.)
2. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado, el señor senador por el Neuquén don Elías Sapag procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 3937.)
3. **Moción del señor senador Rodríguez Saá para fijar el plan de labor para la sesión de la fecha.** Se aprueba. (Pág. 3937.)
4. De acuerdo con el plan de labor aprobado en el punto anterior de este sumario, se vota y aprueba el pase a cuarto intermedio para mañana a las 15 y 30 una vez terminada esta reunión. (Pág. 3937.)
5. **Moción del señor senador Britos para agregar el plan de labor de la sesión de la fecha el proyecto de ley en revisión referido al pago en cuotas con bonos a jubilados que así lo hubieran acordado con el sistema de previsión social.** (C.D.-82/91.) Se aprueba. (Pág. 3937.)
6. **Sesión secreta.** (Pág. 3938.)
7. **Moción de preferencia formulada por el señor senador Aguirre Lanari para considerar en la sesión del miércoles 17 del corriente el proyecto de ley sobre seguridad interior.** (C.D.-31/91.) Se aprueba. (Pág. 3938.)
8. **Asuntos entrados:**
 - I. **Mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos.** (P.E.-356, 357, 367, 369 y 370/91.) (Pág. 3938.)
 - II. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Atómica.** (P.E.-358/91.) (Página 3938.)
 - III. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.** (P.E.-359/91.) (Pág. 3941.)
 - IV. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueban las actas del XX Congreso de la Unión Postal Universal.** (P.E.-368/91.) (Pág. 3949.)
 - V. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Convención de Cooperación Judicial con la República Francesa.** (P.E.-371/91.) (Pág. 3950.)
 - VI. **Comunicaciones de la Presidencia de la Nación.** (Pág. 3953.)
 - VII. **Proyecto de ley en revisión por el que se declara zona de desastre al territorio de Santa Cruz.** (C.D.-99/91.) (Pág. 3953.)
 - VIII. **Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.** (C.D.-100/91.) (Pág. 3955.)
 - IX. **Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 23.555 (Feriados nacionales).** (C.D.-101/91.) (Pág. 3962.)
 - X. **Proyecto de ley en revisión por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en Quilmes, Buenos Aires.** (C.D.-102/91.) (Pág. 3962.)
 - XI. **Proyecto de ley en revisión por el que se crea la Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo.** (C.D.-103/91.) (Pág. 3963.)
 - XII. **Proyecto de ley en revisión por el que se cede un inmueble a la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, para la ampliación del Parque Nacional a la Bandera.** (C.D.-104/91.) (Pág. 3963.)
 - XIII. **Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 20.957 (Servicio Exterior de la Nación), incorporándose la figura de cónsul honorario.** (C.D.-105/91.) (Página 3964.)
 - XIV. **Proyecto de ley en revisión por el que se dispone la erección de un templete en el Salón Azul del Congreso de la Nación, donde se conserven y exhiban al público los originales de la Constitución Nacional.** (C.D.-106/91.) (Pág. 3964.)
 - XV. **Proyecto de ley en revisión por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en Necochea, Buenos Aires.** (C.D.-107/91.) (Pág. 3964.)
 - XVI. **Proyecto de ley en revisión por el que se declara de carácter obligatorio y de interés nacional la lucha contra el uso indebido del alcohol.** (C.D.-108/91.) (Pág. 3965.)
 - XVII. **Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.** (Pág. 3967.)
 - XVIII. **Comunicaciones oficiales.** (Pág. 3968.)
 - XIX. **Dictámenes de comisiones.** (Pág. 3968.)
 - XX. **Peticiones particulares.** (Pág. 3970.)
 - XXI. **Proyecto de comunicación del señor senador Conchez por el que se solicita un subsidio para la "Fundación Generación 2000".** (S.-964/91.) (Pág. 3970.)
 - XXII. **Proyecto de comunicación del señor senador Lafferrère y otros señores senadores por el que se solicita la realización de reuniones de coordinación del Grupo de Parlamentarios Argentinos en el marco del Tratado de Asunción (Mercosur).** (S.-965/91.) (Pág. 3971.)

- XXIII. Proyecto de comunicación del señor senador Lafferrière y otros señores senadores por el que se solicita se invite al Senado de Chile para que el país se incorpore al Mercado Común del Sur. (S.-966/91.) (Página 3971.)
- XXIV. Proyecto de declaración del señor senador Lafferrière y otros señores senadores por el que se expresa satisfacción por la creación del Mercado Común del Sur. (S.-967/91.) (Pág. 3972.)
- XXV. Proyecto de resolución del señor senador Rubeo y otros señores senadores por el que se expresa beneplácito por la aprobación de la Declaración de Cartagena emitida por la XIII Asamblea del Parlamento Latinoamericano efectuada en Colombia. (S.-968/91.) (Pág. 3973.)
- XXVI. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes acerca de la liquidación y licitación del Banco Avellaneda. (S.-970/91.) (Página 3974.)
- XXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Bravo Herrera por el que se solicita se declare de interés nacional el programa de capacitación para chicos en circunstancias especialmente difíciles instrumentado entre UNICEF de Argentina, el CONET y la Fundación Generación 2000. (S.-971/91.) (Pág. 3975.)
- XXVIII. Proyecto de resolución de los señores senadores Bravo y Posleman por el que adhieren a las XXV Jornadas de la Federación Argentina de Entidades Pro-Atención al Deficiente Mental (FENDIM). (S.-972/91.) (Pág. 3975.)
- XXIX. Proyecto de ley de los mismos señores senadores por el que se deroga el decreto 24.095/45 a los efectos de liberalizar la venta y distribución de diarios y revistas. (S.-973/91.) (Pág. 3975.)
- XXX. Proyecto de ley de los mismos señores senadores por el que se deja sin efecto el recargo sobre el precio de venta de la electricidad, establecido por la ley 15.336. (S.-974/91.) (Pág. 3976.)
- XXXI. Proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se dispone la creación de un subgrupo de trabajo dentro del Mercosur encargado de la problemática de la preservación del medio ambiente. (S.-975/91.) (Pág. 3976.)
- XXXII. Proyecto de ley del señor senador Rubeo y otros señores senadores por el que se crea el Fondo Nacional para la Lucha contra el Narcotráfico y la Prevención de la Drogadicción. (S.-976/91.) (Pág. 3978.)
- XXXIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Gurdulich de Correa por el que se solicita se declare de interés nacional el seminario taller "Mujer y Medio Ambiente". (S.-977/91.) (Pág. 3979.)
- XXXIV. Proyecto de comunicación del señor senador Gass por el que se solicitan informes acerca de la privatización de la empresa Obras Sanitarias de la Nación. (S.-978/91.) Manifestaciones del señor senador Gass con relación a las respuestas a los pedidos de informe formulados por el Honorable Senador. (Pág. 3979.)
- XXXV. Proyecto de ley de los señores senadores Saadi de Dentone y Amoedo por el que se dispone un reembolso adicional para la exportación de productos a través de las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. (S.-979/91.) (Pág. 3981.)
- XXXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por el que se solicita se dé solución al problema del suministro de energía eléctrica en Catamarca. (S.-980/91.) (Pág. 3982.)
- XXXVII. Proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se solicita la unificación de proyectos relativos al Mercosur bajo el título "Proyecto argentino integral". (S.-981/91.) (Pág. 3982.)
- XXXVIII. Proyecto de comunicación de los señores Bravo y Posleman por el que se solicitan informes acerca del incremento de la cantidad de puestos de trabajo en el sector privado. (S.-983/91.) (Pág. 3983.)
- XXXIX. Proyecto de ley de los mismos señores senadores por el que se disponen normas especiales para la instalación de servicios telefónicos en los cuerpos de hombres voluntarios. (S.-984/91.) (Pág. 3984.)
- XL. Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicita la reactivación de las obras de la interconexión energética Sur Paso de los Libres-Uruguayana, en la Argentina y Brasil respectivamente. (S.-985/91.) (Pág. 3985.)
- XLI. Proyecto de ley del señor senador Costanzo sobre represión a la violencia en espectáculos deportivos. (S.-986/91.) (Pág. 3986.)
- XLII. Proyecto de comunicación del señor senador Rubeo por el que se solicita la realización de una campaña de prevención del SIDA en actividades ajenas al arte de curar con riesgo de contagio. (S.-987/91.) (Pág. 3989.)
- XLIII. Proyecto de resolución del señor senador Rodríguez Saá por el que se modifica el reglamento del Honorable Senado respecto del uso de la palabra y cómputo del quórum. (S.-988/91.) (Pág. 3989.)

- XLIV. Proyecto de ley del señor senador Brasesco por el que se denomina al complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo con el nombre de "Fermín Jesús Garay". (S.-989/91.) (Pág. 3990.)
- XLV. Proyecto de comunicación del señor senador Conchez por el que se solicita la profundización del acceso marítimo del puerto de Quequén, Buenos Aires. (S.-990/91.) (Pág. 3990.)
- XLVI. Proyecto de ley de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre jubilaciones de integrantes de los poderes del Estado. (S.-991/91.) (Pág. 3991.)
- XLVII. Proyecto de ley de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre jubilaciones de investigadores científicos y personal del servicio exterior. (S.-991/91.) (Pág. 3996.)
- XLVIII. Proyecto de ley de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre jubilaciones del sector docente. (S.-991/91.) (Pág. 3997.)
- XLIX. Proyecto de ley de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre regímenes especiales de jubilaciones. (S.-991/91.) (Pág. 3998.)
- I. Proyecto de resolución de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre compensación resarcitoria temporaria para legisladores nacionales. (S.-991/91.) (Pág. 3998.)
- LI. Proyecto de ley del señor senador Costanzo por el que se transfiere un inmueble del Estado a la Universidad Nacional del Comahue, Río Negro. (S.-992/91.) (Pág. 3998.)
- LII. Proyecto de ley del señor senador Lafferrère por el que se derogan aranceles de importación de papel para diarios, revistas libros y folletos. (S.-994/91.) (Pág. 3999.)
- LIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se derogan aranceles para la importación de revistas, libros y folletos. (S.-998/91.) (Pág. 4000.)
9. Homenaje al Día del Taquígrafo. (Pág. 4000.)
10. A moción del señor senador Britos se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el dictamen de la Comisión Bicameral creada por la ley 23.966 en el proyecto de ley sobre jubilaciones de integrantes de los tres poderes del Estado y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (S.-991/91.) (Pág. 4001.)
11. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el dictamen de la Comisión Bicameral creada por la ley 23.966 en el proyecto de ley sobre jubilaciones de investigadores científicos y personal del servicio exterior. (S.-991/91.) (Pág. 4002.)
12. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el dictamen de la Comisión Bicameral creada por la ley 23.966 en el proyecto de ley relacionado con las jubilaciones del sector docente. (S.-991/91.) (Pág. 4002.)
13. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión Bicameral creada por la ley 23.966 en el proyecto de ley referido a regímenes diferenciales por insalubridad, tareas penosas y riesgosas o determinantes de vejez prematura. (S.-991/91.) (Pág. 4002.)
14. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de resolución vinculado con la compensación resarcitoria temporaria para legisladores nacionales. (S.-991/91.) (Pág. 4002.)
15. Consideración del dictamen en mayoría de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Legislación General, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Relaciones Exteriores y Culto y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de Ley Nacional de Empleo. (P.E.-269/90, S.-158 y 932/89 y S.-523 y 886/90.) Se aprueba. (Pág. 4003.)
16. A moción del señor senador Molina se considera sobre tablas y se aprueba por la Cámara constituida en comisión el proyecto de ley en revisión por el que se declara zona de desastre a un sector del territorio de la provincia de Santa Cruz debido a la erupción del volcán Hudson. (C.D.-99/91.) (Pág. 4031.)
17. Consideración en general del dictamen de las comisiones de Educación, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Rivas y del señor senador Romero Ferris sobre transferencia de servicios educativos a las provincias. (S.-832/91.) (Pág. 4036.)
18. Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 4061.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 15 del miércoles 13 de noviembre de 1991:

I

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Brasesco). — La Presidencia solicita a los señores presidentes de bloque que gestionen la rápida presencia de los señores senadores de las diferentes bancadas, para que pueda dar comienzo la sesión, ya que nos encontramos excedidos del término que fija el reglamento y correspondería levantarla por falta de quórum. La Presidencia está dispuesta a proceder así si ello es necesario.

Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con las modificaciones propuestas por el señor senador Britos.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

Sr. Britos. — En el primer proyecto de ley no se mencionó el anexo 1 del artículo 8°.

Sr. Presidente (Brasesco). — Es parte del proyecto, y ha sido aprobado, señor senador.

15

LEY NACIONAL DE EMPLEO

Sr. Presidente (Brasesco). — Corresponde considerar el dictamen en mayoría de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Legislación General, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Relaciones Exteriores y Culto y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de Ley Nacional de Empleo.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Dictamen de comisiones en mayoría

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Legislación General, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Relaciones Exteriores y Culto y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, han considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre Ley Nacional de Empleo; y por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aceptación de las mismas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 6 de noviembre de 1991.

Oraldo N. Britos. — **Rubén H. Marín**. —
Eduardo P. Vaca. — **Eduardo Menem**.

¹ Ver el Apéndice.

— **José O. Figueroa**. — **Arturo I. Jiménez Montilla**. — **Alberto J. Rodríguez Saá**. — **Horacio F. Bravo Herrera**. — **Jorge D. Solana**. — **César Mac Karthy**. — **Wilfrido Samudio Godoy**. — **Rogelio J. Nieves**. — **Alfredo L. Benítez**. — **Remo J. Costanzo**. — **Alicia A. Saadi de Dentone**. — **Olijela del Valle Rivas**. — **Juan C. Romero**. — **Libardo N. Sánchez**. — **Luis Rubeo**.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(2 de octubre de 1991)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

Ambito de aplicación, objetivos y competencias

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1° — Las acciones del Poder Ejecutivo dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la población adoptarán como un eje principal la política de empleo, entendido éste como situación social jurídicamente configurada. Dicha política, que a través de los mecanismos previstos en esta ley tiende a hacer operativo el derecho constitucional a trabajar, integra en forma coordinada las políticas económico-sociales.

Art. 2° — Son objetivos de esta ley:

- Promover la creación del empleo productivo a través de las distintas acciones e instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional, así como a través de programas y medidas específicas de fomento del empleo;
- Prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva y de reforma estructural sobre el empleo, sin perjuicio de salvaguardar los objetivos esenciales de dichos procesos;
- Inducir la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas o rurales de baja productividad e ingresos, a otras actividades de mayor productividad;
- Fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral;
- Incorporar la formación profesional como componente básico en las políticas y programas de empleo;
- Promover el desarrollo de políticas tendientes a incrementar la producción y la productividad;

- g) Atender la movilidad sectorial y geográfica de la mano de obra, de modo de contribuir a una mayor adecuación entre la disponibilidad de mano de obra y la generación de puestos de trabajo;
- h) Organizar un sistema eficaz de protección a los trabajadores desocupados;
- i) Establecer mecanismos adecuados para la operativa del régimen del salario mínimo, vital y móvil;
- j) Promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando las prácticas evasoras;
- k) Implementar mecanismos de participación tripartita y federal en el nivel de toma de decisiones, y de federalización y descentralización municipal en el nivel de ejecución y gestión.

Art. 3º — La política de empleo comprende las acciones de prevención y sanción del empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción y defensa del empleo, de protección a trabajadores desempleados, de formación y orientación profesional para el empleo y las demás previstas en esta ley. Su formulación y ejecución es misión del Poder Ejecutivo a través de la acción coordinada de sus distintos organismos.

Art. 4º — Inclúyense como incisos 21, 22 y 23 del artículo 23 de la Ley de Ministerios (t.o. 1983) los siguientes:

- 21. Entender en la elaboración de políticas y programas de empleo.
- 22. Entender en la elaboración de estadísticas, estudios y encuestas que proporcionen un mejor conocimiento de la problemática del empleo, la formación profesional y los ingresos.
- 23. Intervenir en la definición de contenidos y el diseño de los censos y encuestas que realicen los organismos oficiales en lo referente al empleo, la formación profesional y los ingresos.

Art. 5º — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de esta ley y deberá elaborar regularmente el Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional. Asimismo, podrá delegar las facultades de policía derivadas de la aplicación de políticas fijadas por esta ley mediante convenios celebrados con las provincias.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecerá un mecanismo de coordinación interministerial para facilitar la aplicación de esta ley que asegure una fluida información, la adopción de criterios comunes y una adecuada ejecución de las medidas.

TITULO II

De la regularización del empleo no registrado

CAPÍTULO I

Empleo no registrado

Art. 7º — Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador:

- a) En el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) o en la do-

cumentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares;

- b) En los registros mencionados en el artículo 18, inciso a).

Las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no registradas.

Art. 8º — El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).

Art. 9º — El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

Art. 10. — El empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a éste una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración.

Art. 11. — Las indemnizaciones previstas en los artículos 8º, 9º y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente intime al empleador en forma fehaciente, a fin que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones.

Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador diera total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta (30) días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8º, 9º y 10 de esta ley, sólo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos (2) años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia.

Art. 12. — El empleador que registrare espontáneamente y comunicare de modo fehaciente al trabajador dentro de los noventa (90) días de la vigencia de esta ley las relaciones laborales establecidas con anterioridad a dicha vigencia y no registradas, quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones, multas y recargos adeudados, incluyendo obras sociales, emergentes de esa falta de registro.

El empleador que, dentro del mismo plazo, rectifique la falsa fecha de ingreso o consignare el verdadero monto de la remuneración de una relación laboral establecida con anterioridad a la vigencia de esta ley y comunicare simultánea y fehacientemente al trabajador esta circunstancia, quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones, multas y recargos adeudados hasta la fe-

cha de esa vigencia, derivados del registro insuficiente o tardío.

No quedan comprendidas en este supuesto las deudas verificadas administrativa o judicialmente.

A los fines previsionales, las relaciones laborales registradas según lo dispuesto en este artículo:

- a) Podrán computarse como tiempo efectivo de servicio;
- b) No acreditarán aportes ni monto de remuneraciones.

Art. 13. — En los casos previstos en el artículo anterior el empleador quedará eximido del pago de las indemnizaciones que correspondieren por aplicación de los artículos 8º, 9º y 10 de la presente ley.

Art. 14. — Para la percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 8º, 9º y 10 de la presente ley, no será requisito necesario la previa extinción de la relación de trabajo.

Art. 15. — Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos (2) años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgare efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará.

La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8º, 9º y 10, y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido.

Art. 16. — Cuando las características de la relación existente entre las partes pudieran haber generado en el empleador una razonable duda acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el juez o tribunal podrá reducir la indemnización prevista en el artículo 8º hasta una suma no inferior a dos veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).

Con igual fundamento los jueces podrán reducir el monto de la indemnización establecida en el artículo anterior hasta la eliminación de la duplicación allí prevista.

Art. 17. — Será nulo y sin ningún valor todo pago por los conceptos indicados en los artículos 8º, 9º y 10 que no se realizare ante la autoridad administrativa o judicial.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que reconozca el derecho a percibir dichas indemnizaciones o de la resolución homologatoria del acuerdo conciliatorio o transaccional que versare sobre ellas, la autoridad administrativa o judicial, según el caso, deberá poner en conocimiento del Sistema Unico de Registro Laboral o, hasta su efectivo funcionamiento, del Instituto Nacional de Previsión Social, caja de asignaciones y subsidios familiares y obras sociales, las siguientes circunstancias:

- a) Nombre íntegro o razón social del empleador y su domicilio;
- b) Nombre y apellido del trabajador;
- c) Fecha de comienzo y fin de la vinculación laboral, si ésta se hubiere extinguido;
- d) Monto de las remuneraciones.

Constituirá falta grave del funcionario actuante si éste no cursare la comunicación referida en el plazo establecido.

No se procederá al archivo del expediente judicial o administrativo respectivo hasta que el funcionario competente dejare constancia de haberse efectuado las comunicaciones ordenadas en este artículo.

CAPÍTULO 2

Del Sistema Unico de Registro Laboral

Art. 18. — El Sistema Unico de Registro Laboral concentrará los siguientes registros:

- a) La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y a la obra social correspondiente;
- b) El registro de los contratos de trabajo bajo modalidades promovidas según las prescripciones de esta ley;
- c) El registro de los trabajadores beneficiarios del sistema integral de prestaciones por desempleo.

Art. 19. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tendrá a su cargo la organización, conducción y supervisión del Sistema Unico de Registro Laboral, a cuyo fin tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Coordinar las acciones de los organismos mencionados en el artículo 18 inciso a) de modo de obtener el máximo de uniformidad, celeridad y eficacia en la organización del sistema;
- b) Elaborar el padrón único base del Sistema Unico de Registro Laboral, con los datos existentes en esos organismos y los que surjan de los nuevos empadronamientos;
- c) Aprobar los formularios de inscripción de los obligados al registro;
- d) Disponer la habilitación de las distintas bocas de recepción de las solicitudes de inscripción de los obligados al registro sobre la base de las oficinas existentes en los mismos organismos;
- e) Disponer la compatibilización y posterior homogeneización de los sistemas y procedimientos informáticos de registro a fin de establecer un sistema integrado;
- f) Disponer el adecuado, inmediato y exacto conocimiento por parte de esos organismos, de los datos que conforman el Sistema Unico de Registro Laboral, facilitando sus respectivas tareas de fiscalización y ejecución judicial;
- g) Diseñar y hacer aplicar la boleta única de pago de aportes y contribuciones emergentes de la relación laboral, con excepción de las obras so-

ciales. Por este último concepto, y con fines informativos sólo constará la fecha y la institución recaudadora del pago correspondiente al mes anterior de que se trate;

- h) Establecer el código único de identificación laboral.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social designará el funcionario que ejercerá las atribuciones enumeradas, fijando su jerarquía y retribución.

Art. 20. — El Instituto Nacional de Previsión Social, las cajas de subsidios familiares y los entes de obras sociales, deberán poner a disposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los datos y los medios necesarios para la creación y organización del Sistema Único de Registro Laboral.

TÍTULO III

De la promoción y defensa del empleo

CAPÍTULO 1

Medidas e incentivos para la generación de empleo

Art. 21. — El Poder Ejecutivo incorporará el criterio de la generación de empleo en el análisis y diseño de las políticas nacionales que tengan una incidencia significativa en el nivel y composición del empleo.

Art. 22. — A los efectos del artículo anterior, además de las medidas específicas que contempla la presente ley, el Poder Ejecutivo instrumentará acciones dirigidas a:

- a) Elevar los niveles de utilización de la capacidad instalada, en un contexto de crecimiento económico;
- b) Facilitar la inversión productiva en el sector privado, en particular la que genere mayor impacto ocupacional directo e indirecto;
- c) Establecer la exigencia, para los proyectos de inversión pública y para aquellos del área privada que reciban apoyo crediticio del Estado nacional, de cuantificar sus efectos ocupacionales y el costo por unidad de empleo;
- d) Incluir proyectos de alta incidencia ocupacional en la programación de la inversión pública nacional;
- e) Atender a los efectos sobre el empleo de las políticas tecnológicas de modo que, a la par de buscar una mayor eficiencia económica en áreas prioritarias, preserve para otros sectores un balance más equilibrado en el uso de recursos;
- f) Atenuar los efectos negativos en el empleo de los sectores en declinación y áreas geográficas en crisis;
- g) Desarrollar una asociación más estrecha entre la capacitación y formación de la fuerza laboral y el sistema productivo;
- h) Regular y armonizar la fuerza de trabajo con el crecimiento productivo.

Art. 23. — La incorporación de tecnología constituye una condición para el crecimiento de la economía nacional. Es un derecho y una obligación del empresario que la ley reconoce, garantiza y estimula, y en la medida que afecta las condiciones de trabajo y empleo debe ser evaluada desde el punto de vista técnico, económico y social.

Art. 24. — Las comisiones negociadoras de convenios colectivos tendrán obligación de negociar sobre las siguientes materias:

- a) La incorporación de la tecnología y sus efectos sobre las relaciones laborales y el empleo;
- b) El establecimiento de sistemas de formación que faciliten la polivalencia de los trabajadores;
- c) Los regímenes de categorías y la movilidad funcional;
- d) La inclusión de una relación apropiada sobre la mejora de la productividad, el aumento de la producción y el crecimiento de los salarios reales;
- e) Implementación de las modalidades de contratación previstas en esta ley;
- f) Las consecuencias de los programas de reestructuración productiva, en las condiciones de trabajo y empleo;
- g) El establecimiento de mecanismos de oportuna información y consulta.

La falta de conclusiones sobre cualquiera de estas materias, no impedirá la homologación del convenio.

Art. 25. — Sustitúyese el artículo 198, de la Ley de Contrato de Trabajo (texto ordenado en 1976), por el siguiente:

Artículo 198: Jornada reducida. La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad.

Art. 26. — Derógase el artículo 173 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto ordenado en 1976). En consecuencia denúnciense el convenio cuatro (4) y el convenio cuarenta y uno (41) de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por las leyes 11.726 y 13.560, respectivamente.

CAPÍTULO 2

Modalidades del contrato de trabajo *Disposiciones generales*

Art. 27. — Ratifícase la vigencia del principio de indeterminación del plazo, como modalidad principal del contrato de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976).

Con relación a las modalidades de contratación previstas en esta ley, en caso de duda se considerará que el contrato es por tiempo indeterminado.

Art. 28. — Las modalidades de contratación previstas en esta ley pueden ser promovidas o no promovidas. Son promovidas las de trabajo por tiempo determinado como medida de fomento del empleo, por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación. Son no promovidas las contrataciones de temporada y eventual.

Art. 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.

Art. 30. — Las modalidades promovidas se habilitarán a través de las convenciones colectivas de trabajo, a cuyo efecto deberán reunirse las correspondientes comisiones negociadoras, las que deberán pronunciarse en noventa (90) días a contar de su convocatoria. Los acuerdos se formalizarán en un instrumento especial, el que será homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18 inciso b).

Art. 32. — Para poder contratar bajo las modalidades promovidas, el empleador no deberá tener deudas exigibles con los organismos previsionales, de asignaciones familiares, obra social, FONAVI, Fondo Nacional de Empleo y asociaciones sindicales.

Art. 33. — En las empresas o establecimientos en los que se prevea adoptar las modalidades promovidas de contratación, la asociación sindical correspondiente deberá ser informada al respecto por el empleador de acuerdo a lo establecido por la convención colectiva aplicable.

Asimismo, de oficio o a instancia de la asociación sindical respectiva, la autoridad de aplicación verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en este capítulo, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 43 de la ley 23.551 y el artículo 26 del decreto 467/88.

Art. 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.

En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del ciento por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utili-

zando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.

Art. 35. — Los contratos celebrados según las modalidades previstas en este capítulo se convertirán en contratos de trabajo por tiempo indeterminado en los siguientes supuestos:

- a) Cuando no se dé cumplimiento a los requisitos formales o sustanciales para estos tipos de contratación;
- b) Cuando, pasados los treinta (30) días de iniciada la relación laboral, no se cumpliera con lo dispuesto en el artículo 31;
- c) Cuando se excediera el plazo máximo previsto para la modalidad respectiva;
- d) Cuando, al vencimiento del plazo convenido y las prórrogas autorizadas, el trabajador continuase prestando servicios en la empresa;
- e) Cuando excediera el porcentaje permitido por la presente ley conforme lo establezca la reglamentación.

Art. 36. — Los contratos bajo modalidades promovidas sólo podrán celebrarse cuando los nuevos contratados lo sean en exceso del plantel total promedio de los últimos seis (6) meses. No podrán igualmente contratar bajo estas modalidades las empresas que hayan producido despidos colectivos por cualquier causa en los doce (12) meses anteriores a la contratación y posteriores a la sanción de esta ley, o que se hallaren en conflicto colectivo, salvo acuerdo en contrario en la negociación colectiva o que el despido estuviere fundado en justa causa.

El empleador deberá abstenerse de suspender o despedir colectivamente trabajadores durante los seis (6) meses posteriores a la celebración del contrato bajo esta modalidad. La violación de esta disposición convertirá tales acuerdos en contratos por tiempo indeterminado.

Art. 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.

Art. 38. — En los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas, salvo las de práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación, la extinción de la relación de trabajo al vencimiento del plazo pactado o sus respectivas prórrogas, dará lugar a la percepción de una indemnización equivalente a medio salario mensual, tomando como base la mejor remuneración normal y habitual devengada durante la vigencia del contrato, la que se acumulará a la indemnización sustitutiva del preaviso en el caso en que éste no se hubiera otorgado.

Art. 39. — En las modalidades promovidas la ruptura del contrato sin causa justificada por parte del empleador dará lugar a la aplicación del primer párrafo del artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), con excepción de lo previsto para los contratos de práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación.

Art. 40. — La celebración en forma sucesiva de contratos bajo modalidades promovidas en exceso del plazo

máximo autorizado, para cubrir un mismo puesto de trabajo, convertirá al contrato en uno por tiempo indeterminado.

Esta regla no se aplicará en los siguientes casos:

- a) A los contratos sucesivos de práctica laboral para jóvenes;
- b) A los contratos sucesivos de trabajo-formación;
- c) Cuando el trabajador contratado bajo modalidad promovida que hubiere ocupado anteriormente ese mismo puesto de trabajo, fuere contratado por tiempo indeterminado sin solución de continuidad en la misma empresa.

Respecto de los contratos de las modalidades no promovidas regirá el capítulo I del título III de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).

Art. 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscritos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad en la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.

La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.

Art. 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.

Contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de fomento del empleo

Art. 43. — El contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, es el celebrado por un empleador y un trabajador inscrito como desempleado en la Red de Servicios de Empleo o que haya dejado de prestar servicios en el sector público por medidas de racionalización administrativa, bajo los requisitos y condiciones establecidos en los artículos siguientes.

Art. 44. — El plazo mínimo de estos contratos será de seis (6) meses y el máximo no podrá exceder de dieciocho (18) meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de seis (6) meses como mínimo.

Art. 45. — Los puestos de trabajo permanentes que hubieran quedado vacantes durante los últimos seis (6) meses no podrán ser cubiertos por personal contratado bajo esta modalidad salvo acuerdo en negociación colectiva o habilitación por la autoridad administrativa del trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.

El plazo previsto en este artículo comenzará a regir a partir de la sanción de la presente ley.

Art. 46. — El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones pa-

tronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo Nacional de Empleo.

Contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de una nueva actividad

Art. 47. — El contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, es el celebrado entre un empleador y un trabajador para la prestación de servicios en un nuevo establecimiento o una nueva línea de producción de un establecimiento preexistente, bajo los requisitos y condiciones establecidos en los artículos siguientes.

Art. 48. — El plazo mínimo de estos contratos será de seis (6) meses y el máximo no podrá exceder de veinticuatro (24) meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de seis (6) meses como mínimo.

Cualquiera sea la fecha de celebración de los contratos establecidos bajo esta modalidad, su vigencia cesará a los cuatro (4) años de iniciada la nueva actividad.

Art. 49. — El empleador deberá abstenerse de suspender o despedir colectivamente trabajadores de los antiguos establecimientos o líneas de producción, durante el año posterior a la celebración de contrataciones bajo esta modalidad, salvo que la medida se hallare fundada en justa causa. La violación de esta disposición convertirá tales acuerdos en contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

Art. 50. — El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales por este tipo de contrato a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo Nacional de Empleo.

Contrato de práctica laboral para jóvenes

Art. 51. — El contrato de práctica laboral para jóvenes es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, con formación previa, en busca de su primer empleo para aplicar y perfeccionar sus conocimientos.

Art. 52. — El contrato de práctica laboral se celebrará por un (1) año.

Art. 53. — Serán requisitos para celebrar estos contratos, los siguientes:

- a) Que los trabajadores acrediten formación técnica, profesional o laboral que los habilite para esa práctica laboral mediante certificación reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
- b) Que la práctica laboral sea adecuada a su nivel de formación.

Art. 54. — En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato, que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo,

el que deberá ser validado por la autoridad administrativa de aplicación.

Art. 55. — Los jóvenes de 14 a 16 años quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), artículo 187, siguientes y concordantes en todo lo que no sea expresamente modificado por esta ley.

Art. 56. — Cuando el contrato cesare en su vigencia por cumplimiento del plazo establecido en el artículo 52, el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente.

En los otros supuestos regirá el artículo 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976).

Art. 57. — Los empleadores que adopten esta modalidad de contratación quedan exentos por este tipo de contratos de las contribuciones patronales a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ y a las cajas de asignaciones y subsidios familiares.

Contrato de trabajo-formación

Art. 58. — El contrato de trabajo-formación es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, sin formación previa, en busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una formación teórico-práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo.

Art. 59. — El contrato de trabajo-formación tendrá un plazo de duración mínima de cuatro (4) meses y un máximo de dos (2) años.

Art. 60. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá formular el plan general de alternancia de formación y trabajo, al que deberán adecuarse estos contratos.

El trabajo será realizado en la empresa. La formación podrá realizarse en la empresa cuando ésta cuente con un centro especializado para tal fin; en su defecto quedará a cargo de un organismo de los comprendidos en el título V, capítulo 1 de esta ley.

Entre un cuarto y la mitad del tiempo de trabajo deberá dedicarse a la formación, proporción que podrá concentrarse o alternarse con la de trabajo efectivo en la empresa.

Art. 61. — La remuneración del tiempo de trabajo en la empresa estará a cargo del empleador. La remuneración del tiempo empleado en la formación del trabajador estará a cargo del Fondo Nacional de Empleo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Art. 62. — En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo y la formación recibida por el trabajador, el que será validado por la autoridad administrativa de aplicación.

Art. 63. — Los jóvenes de 14 a 16 años quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), artículo 187, siguientes y concordantes, en todo lo que no sea expresamente modificado por esta ley.

Art. 64. — El contrato cesará en su vigencia por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización

alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente.

En los otros supuestos regirá el artículo 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976).

Art. 65. — Los empleadores que adopten esta modalidad de contratación quedan exentos por este tipo de contratos de las contribuciones patronales, a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ y a las cajas de asignaciones y subsidios familiares.

Contrato de trabajo de temporada

Art. 66. — Sustitúyese el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976) por el siguiente:

Artículo 96: Caracterización: habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad.

Art. 67. — Sustitúyese el artículo 98 de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976) por el siguiente:

Artículo 98. — Con una antelación no menor a treinta (30) días respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de cinco (5) días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, responderá por las consecuencias de la extinción del mismo.

Contrato de trabajo eventual

Art. 68. — Sustitúyese el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976) por el siguiente:

Artículo 99. — Caracterización: cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo la prueba de su aseveración.

Art. 69. — Para el caso que el contrato de trabajo eventual tuviera por objeto sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que gozaran de licencias legales o convencionales o que tuvieran derecho a reserva del puesto por un plazo incierto, en el contrato deberá indicarse el nombre del trabajador reemplazado.

Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el trabajador contratado bajo esta modalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en uno por tiempo indeterminado. Igual consecuencia tendrá la continuación en la prestación de servicios una vez vencido el plazo de licencia o de reserva del puesto del trabajador reemplazado.

Art. 70. — Se prohíbe la contratación de trabajadores bajo esta modalidad para sustituir trabajadores que no prestaran servicios normalmente en virtud del ejercicio de medidas legítimas de acción sindical.

Art. 71. — Las empresas que hayan producido suspensiones o despidos de trabajadores por falta o disminución de trabajo durante los seis (6) meses anteriores, no podrán ejercer esta modalidad para reemplazar al personal afectado por esas medidas.

Art. 72. — En los casos que el contrato tenga por objeto atender exigencias extraordinarias del mercado, deberá estarse a lo siguiente:

- a) En el contrato se consignará con precisión y claridad la causa que lo justifique;
- b) La duración de la causa que diera origen a estos contratos no podrá exceder de seis (6) meses por año y hasta un máximo de un (1) año en un período de tres (3) años.

Art. 73. — El empleador no tiene el deber de preavisar la finalización del contrato.

Art. 74. — No procederá indemnización alguna cuando la relación laboral se extinga con motivo de finalización de la obra o tarea asignada, o del cese de la causa que le diera origen. En cualquier otro supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).

De las empresas de servicios eventuales

Art. 75. — Derógase el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el que se sustituye por el siguiente:

Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas.

Art. 76. — Incorpórase como artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el siguiente:

Art. 29 bis. — El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas

las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.

Art. 77. — Las empresas de servicios eventuales deberán estar constituidas exclusivamente como personas jurídicas y con objeto único. Sólo podrán mediar en la contratación de trabajadores bajo la modalidad de trabajo eventual.

Art. 78. — Las empresas de servicios eventuales estarán obligadas a caucionar una suma de dinero o valores además de una fianza o garantía real. Los montos y condiciones de ambas serán determinadas por la reglamentación.

Art. 79. — Las violaciones o incumplimientos de las disposiciones de esta ley y su reglamentación por parte de las empresas de servicios eventuales serán sancionadas con multas, clausura o cancelación de habilitación para funcionar, las que serán aplicadas por la autoridad de aplicación según lo determine la reglamentación.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponder a la empresa usuaria en caso de violación del artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto ordenado en 1976), de acuerdo a las disposiciones de la ley 18.694.

Art. 80. — Si la empresa de servicios eventuales fuera sancionada con la cancelación de la habilitación para funcionar, la caución no será devuelta y la autoridad de aplicación la destinará a satisfacer los créditos laborales que pudieran existir con los trabajadores y los organismos de la seguridad social. En su caso, el remanente será destinado al Fondo Nacional de Empleo. En todos los demás casos en que se cancela la habilitación, la caución será devuelta en el plazo que fije la reglamentación.

CAPÍTULO 3

Programas de empleo para grupos especiales de trabajadores

Art. 81. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá periódicamente programas destinados a fomentar el empleo de los trabajadores que presenten mayores dificultades de inserción laboral. Estos programas deberán atender a las características de los trabajadores a quienes van dirigidos y tendrán una duración determinada. Sin perjuicio de los enumerados en este capítulo, podrán incorporarse otros programas destinados a otros sectores de trabajadores que así lo justifiquen.

Art. 82. — Estos programas podrán contemplar, entre otras medidas:

- a) Actualización y reconversión profesional hacia ocupaciones de expansión más dinámica;
- b) Orientación y formación profesional;
- c) Asistencia en caso de movilidad geográfica;

- d) Asistencia técnica, financiera para iniciar pequeñas empresas, principalmente en forma asociada.

Art. 83. — Programas para jóvenes desocupados. Estos programas atenderán a las personas desocupadas entre catorce (14) y veinticuatro (24) años de edad. Las medidas que se adopten para crear nuevas ocupaciones deberán incluir capacitación y orientación profesionales prestadas en forma gratuita y complementadas con otras ayudas económicas cuando se consideren indispensables.

Art. 84. — Programas para trabajadores cesantes de difícil reinserción ocupacional. Estos programas se dirigirán a aquellas personas desocupadas que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

- a) Que su calificación o desempeño fuere en ocupaciones obsoletas o en vías de extinción;
- b) Que sean mayores de cincuenta (50) años;
- c) Que superen los ocho (8) meses de desempleo.

Estos programas deberán atender a características profesionales y sociales de los trabajadores en relación con los requerimientos de las nuevas ocupaciones y a la duración prolongada del desempleo.

Art. 85. — Programas para grupos protegidos. A los efectos de esta ley se considerará como tales, a las personas mayores de catorce (14) años que estén calificadas por los respectivos estatutos legales para liberados, aborígenes, ex combatientes y rehabilitados de la drogadicción. Estos programas tomarán en cuenta la situación especial de sus beneficiarios y el carácter del trabajo como factor de integración social. Los empleadores que participen en estos programas podrán contratar a trabajadores de estos grupos protegidos por tiempo indeterminado, gozando de la exención del artículo 46 de esta ley por el período de un año.

Art. 86. — Programas para discapacitados. A los efectos de la presente ley, se considerará como discapacitados a aquellas personas calificadas como tales de acuerdo a los artículos 2º y 3º de la ley 22.431 y que sean mayores de catorce años.

Los programas deberán atender al tipo de actividad laboral que las personas puedan desempeñar, según su calificación. Los mismos deberán contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:

- a) Promoción de talleres protegidos de producción; apoyo a la labor de las personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio, y prioridad para trabajadores discapacitados en el otorgamiento o concesión de uso de bienes del dominio público o privado del Estado nacional o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de pequeños comercios o sobre los inmuebles que les pertenezcan o utilicen conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la ley 22.431;
- b) Proveer al cumplimiento de la obligación de ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) del personal

(artículo 8º ley 22.431) en los organismos públicos nacionales, incluidas las empresas y sociedades del Estado;

- c) Impulsar que en las convenciones colectivas se incluyan reservas de puestos de trabajo para discapacitados en el sector privado.

Art. 87. — Los empleadores que contraten trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado gozarán de la exención prevista en el artículo 46 sobre dichos contratos por el período de un (1) año, independientemente de las que establecen las leyes 22.431 y 23.031.

Art. 88. — Los empleadores que contraten un cuatro por ciento (4 %) o más de su personal con trabajadores discapacitados y deban emprender obras en sus establecimientos para suprimir las llamadas barreras arquitectónicas, gozarán de créditos especiales para la financiación de las mismas.

Art. 89. — Los contratos de seguro de accidentes de trabajo no podrán discriminar ni en la prima ni en las condiciones, en razón de la calificación de discapacitado del trabajador asegurado.

CAPÍTULO 4

Fomento del empleo mediante nuevos emprendimientos y reconversión de actividades informales

Art. 90. — Se establecerán programas dirigidos a apoyar la reconversión productiva de actividades informales para mejorar su productividad y gestión económica y a nuevas iniciativas generadoras de empleo.

Se considerarán como actividades informales, aquellas cuyo nivel de productividad esté por debajo de los valores establecidos periódicamente por el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o bien presenten otras características asimilables según lo establezca dicho consejo.

Art. 91. — En estos programas se promoverán la pequeña empresa, microemprendimientos, modalidades asociativas como cooperativas de trabajo, programas de propiedad participada, empresas juveniles y sociedades de propiedad de los trabajadores.

Art. 92. — Se establecerán para esta modalidad de generación de empleo, conjunta o alternativamente, las siguientes medidas de fomento, con los alcances que fije la reglamentación:

- a) Simplificación registral y administrativa;
- b) Asistencia técnica;
- c) Formación y reconversión profesional;
- d) Capacitación en gestión y asesoramiento gerencial;
- e) Constitución de fondos solidarios de garantía para facilitar el acceso al crédito;
- f) Prioridad en el acceso a la modalidad de pago único de la prestación por desempleo prevista en el artículo 127.

Art. 93. — Los proyectos que se incluyan en estos programas requerirán una declaración expresa de via-

bilidad económica formulada a partir de estudios técnicos específicos, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 94. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá constituir y mantener un banco de proyectos, definir los lineamientos básicos para el diseño y brindar asistencia técnica para su ejecución y evaluación.

CAPÍTULO 5

Reestructuración productiva

Art. 95. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá declarar en situación de reestructuración productiva, de oficio o a petición de las partes interesadas, a las empresas públicas o mixtas, o sectores productivos privados, públicos o mixtos, cuando se encuentren o pudieren encontrarse afectados por reducciones significativas del empleo.

Art. 96. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la resolución que declare la reestructuración productiva, convocará a la comisión negociadora del convenio colectivo aplicable para negociar sobre las siguientes materias:

- a) Un programa de gestión preventiva del desempleo en el sector;
- b) Las consecuencias de la reestructuración productiva en las condiciones de trabajo y de empleo;
- c) Medidas de reconversión profesional y de reinserción laboral de los trabajadores afectados.

La comisión negociadora se expedirá en un plazo de treinta (30) días, plazo que la autoridad de aplicación podrá prorrogar por un lapso que no exceda de treinta (30) días más.

El empleador no podrá adoptar medidas que afecten el empleo hasta que se expida la comisión o venzan los plazos previstos.

Art. 97. — En los sectores declarados en situación de reestructuración productiva, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá:

- a) Constituir en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, una comisión técnica tripartita para realizar un estudio entre la situación sectorial que permita conocer las posibilidades de reinserción laboral y las necesidades de formación profesional planteadas;
- b) Autorizar a las empresas no reestructuradas con establecimientos con más de veinticinco (25) trabajadores, la ampliación en un diez por ciento (10 %) del límite fijado en el artículo 34 de la presente ley para contratar trabajadores afectados por la reestructuración durante un plazo máximo de doce (12) meses, en la misma región de su residencia;
- c) Elaborar un programa de empleo y de reconversión profesional destinado a los trabajadores afectados.

CAPÍTULO 6

Procedimiento preventivo de crisis de empresas

Art. 98. — Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del quince por ciento (15 %) de los trabajadores en empresas de menos de cuatrocientos (400) trabajadores; a más del diez por ciento (10 %) en empresas de entre cuatrocientos (400) y mil (1.000) trabajadores; y a más del cinco por ciento (5 %) en empresas de más de mil (1.000) trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo.

Art. 99. — El procedimiento de crisis se tramitará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a instancia del empleador o de la asociación sindical de los trabajadores.

En su presentación, el peticionante fundamentará su solicitud ofreciendo todos los elementos probatorios que considere pertinentes.

Art. 100. — Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la presentación, el Ministerio dará traslado a la otra parte, y citará al empleador y a la asociación sindical a una primera audiencia, dentro de los cinco (5) días.

Art. 101. — En caso de no existir acuerdo en la audiencia prevista en el artículo anterior, se abrirá un período de negociación entre el empleador y la asociación sindical, el que tendrá una duración máxima de diez (10) días.

Art. 102. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición de parte, podrá:

- a) Recabar informes aclaratorios o ampliatorios acerca de los fundamentos de la petición;
- b) Realizar investigaciones, pedir dictámenes y asesoramiento, y cualquier otra medida para mejor proveer.

Art. 103. — Si las partes, dentro de los plazos previstos en este capítulo, arribaren a un acuerdo, lo elevarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien dentro del plazo de diez (10) días podrá:

- a) Homologar el acuerdo con la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo;
- b) Rechazar el acuerdo mediante resolución fundada.

Vencido el plazo sin pronunciamiento administrativo, el acuerdo se tendrá por homologado.

Art. 104. — A partir de la notificación, y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical.

La violación de esta norma por parte del empleador determinará que los trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y deba pagárseles los salarios caídos.

Si los trabajadores ejercieren la huelga u otras medidas de acción sindical, se aplicará lo previsto en la ley 14.786.

Art. 105. — Vencidos los plazos previstos en este capítulo sin acuerdo de partes, se dará por concluido el procedimiento de crisis.

CAPÍTULO 7

Programas de emergencia ocupacional

Art. 106. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá declarar la emergencia ocupacional de sectores productivos o regiones geográficas en atención a catástrofes naturales, razones económicas o tecnológicas.

Art. 107. — A efectos del artículo anterior se establece que:

- a) La declaración de la emergencia ocupacional podrá ser requerida por la autoridad local u organismo provincial competente, o declarada de oficio por la autoridad de aplicación;
- b) Las causales de emergencia ocupacional mencionadas más arriba serán consideradas en cuanto tengan repercusión en los niveles de desocupación y subocupación de la zona afectada o cuando superen los promedios históricos locales una vez efectuado el ajuste correctivo de las variaciones cíclicas estacionales normales de la región.

Art. 108. — Los programas de emergencia ocupacional consistirán en acciones tendientes a generar empleo masivo por un período determinado a través de contratación directa del Estado nacional, provincial y municipal para la ejecución de obras o prestación de servicios de utilidad pública y social, e intensivos en mano de obra, a través de la modalidad prevista en los artículos 43 a 46 de esta ley. En este supuesto, el plazo mínimo de contratación se reducirá a tres (3) meses, así como el de las renovaciones que se dispusieren.

Art. 109. — Durante la vigencia de la emergencia, la autoridad de aplicación podrá habilitar las modalidades promovidas previstas en esta ley, mediante acto fundado. Esta habilitación concluirá al término del período por el cual fue declarada la emergencia ocupacional, manteniéndose los contratos promovidos vigentes, hasta la finalización de su plazo.

Art. 110. — Los programas de emergencia ocupacional se ejecutarán en las zonas de emergencia más altamente pobladas dentro de la zona declarada en emergencia ocupacional y sus beneficiarios serán los residentes en las áreas más próximas a la ejecución de las obras, dándole prioridad a los trabajadores desocupados sin prestaciones por desempleo.

TÍTULO IV

De la protección de los trabajadores desempleados

CAPÍTULO ÚNICO

Sistema integral de prestaciones por desempleo

Art. 111. — La protección que se instituye a través de la presente ley regirá en todo el territorio de la Nación de conformidad con sus disposiciones y las normas reglamentarias que se dicten.

Art. 112. — Las disposiciones de este título serán de aplicación a todos los trabajadores cuyo contrato de trabajo se rija por la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976). No será aplicable a los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, a los trabajadores del servicio doméstico y a quienes hayan dejado de prestar servicios en la administración pública nacional, provincial o municipal afectados por medidas de racionalización administrativa.

El Poder Ejecutivo remitirá al Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo de noventa (90) días de promulgada la presente, un proyecto de ley que regulará el sistema de prestaciones por desempleo para los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción.

Art. 113. — Para tener derecho a las prestaciones por desempleo los trabajadores deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) Encontrarse en situación legal de desempleo y disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado;
- b) Estar inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral o en el Instituto Nacional de Previsión Social hasta tanto aquél comience a funcionar;
- c) Haber cotizado al Fondo Nacional de Empleo durante un período mínimo de doce (12) meses durante los tres (3) años anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo, o al Instituto Nacional de Previsión Social por el período anterior a la existencia del Sistema Único de Registro Laboral;
- d) Los trabajadores contratados a través de las empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente tendrán un período de cotización mínimo de noventa (90) días durante los doce (12) meses anteriores al cese de la relación que dio lugar a la situación legal de desempleo;
- e) No percibir beneficios previsionales o prestaciones no contributivas;
- f) Haber solicitado el otorgamiento de la prestación en los plazos y formas que corresponda.

Art. 114. — Se encontrarán bajo situación legal de desempleo los trabajadores comprendidos en los siguientes supuestos:

- a) Despido sin justa causa (artículo 245, Ley de Contrato de Trabajo, t.o. 1976);
- b) Despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador (artículo 247, Ley de Contrato de Trabajo, t.o. 1976);
- c) Resolución del contrato por denuncia del trabajador fundada en justa causa (artículos 242 y 246, Ley de Contrato de Trabajo, t.o. 1976);
- d) Extinción colectiva total por motivo económico o tecnológico de los contratos de trabajo;

- e) Extinción del contrato por quiebra o concurso del empleador (artículo 251, Ley de Contrato de Trabajo, t. o. 1976);
- f) Expiración del tiempo convenido, realización de la obra, tarea asignada, o del servicio objeto del contrato;
- g) Muerte, jubilación o invalidez del empresario individual cuando éstas determinen la extinción del contrato;
- h) No reiniciación o interrupción del contrato de trabajo de temporada por causas ajenas al trabajador

Si hubiere duda sobre la existencia de relación laboral o la justa causa del despido se requerirá actuación administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, de los organismos provinciales o municipales del trabajo para que determinen sumariamente la verosimilitud de la situación invocada. Dicha actuación no podrá hacerse valer en juicio laboral—

Art. 115.— La solicitud de la prestación deberá presentarse dentro del plazo de noventa (90) días a partir del cese de la relación laboral.

Si se presentare fuera del plazo, los días que excedan de aquél serán descontados del total del período de prestación que le correspondiere.

Art. 116.— La percepción de las prestaciones luego de presentada la solicitud, comenzará a partir del cumplimiento de un plazo de sesenta (60) días corridos que podrá ser reducido por el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En los casos de trabajadores que hubieran percibido gratificaciones por cese de la relación laboral dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la solicitud de prestación por desempleo, el Consejo podrá establecer un período de espera diferenciado de hasta ciento veinte (120) días corridos.

Art. 117.— El tiempo total de prestación estará en relación al período de cotización dentro de los tres (3) años anteriores al cese del contrato de trabajo que dio origen a la situación legal de desempleo con arreglo a la siguiente escala:

Período de cotización	Duración de las prestaciones
De 12 a 23 meses	4 meses
De 24 a 35 meses	8 meses
36 meses	12 meses

Para los trabajadores eventuales comprendidos en el inciso d) del artículo 113, la duración de las prestaciones será de un (1) día por cada tres (3) de servicios prestados con cotización, computándose a ese efecto, exclusivamente, contrataciones superiores a treinta (30) días.

Art. 118.— La cuantía de la prestación por desempleo para trabajadores convencionales o no convencionales será calculada como un porcentaje del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis (6) meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.

El porcentaje aplicable durante los primeros cuatro (4) meses de la prestación será fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Del quinto (5º) al octavo (8º) mes la prestación será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) de la de los primeros cuatro (4) meses.

Del noveno (9º) al duodécimo (12º) mes la prestación será equivalente al setenta por ciento (70 %) de la de los primeros cuatro (4) meses.

En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al mínimo ni superior al máximo que a ese fin determine el mismo Consejo.

Art. 119.— Las siguientes prestaciones formarán parte de la protección por desempleo:

- a) La prestación económica por desempleo, establecida en el artículo anterior;
- b) Prestaciones médico-asistenciales de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661;
- c) Pago de las asignaciones familiares que correspondieren a cargo de las cajas de asignaciones y subsidios familiares;
- d) Cómputo del período de las prestaciones a los efectos previsionales, con los alcances de los incisos a) y b) del artículo 12 de esta ley.

Art. 120.— Los empleadores están obligados a:

- a) Efectuar las inscripciones del artículo 7º de esta ley;
- b) Ingresar sus contribuciones al Fondo Nacional de Empleo;
- c) Ingresar los aportes de los trabajadores al Fondo Nacional de Empleo como agente de retención responsable;
- d) Proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación, datos y certificaciones que reglamentariamente se determinen;
- e) Comprobar fehacientemente que el trabajador en el caso de que fuera receptor de prestaciones por desempleo, hubiera cursado la correspondiente baja al momento de incorporarse a la empresa.

Art. 121.— Los beneficiarios están obligados a:

- a) Proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación que reglamentariamente se determine, así como comunicar los cambios de domicilio o de residencia;
- b) Aceptar los empleos adecuados que le sean ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y asistir a las acciones de formación para las que sean convocados;
- c) Aceptar los controles que establezca la autoridad de aplicación;
- d) Solicitar la extinción o suspensión del pago de prestaciones por desempleo, al momento de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo;
- e) Reintegrar los montos de prestaciones indebidamente percibidas de conformidad con lo que determine la reglamentación;
- f) Declarar gratificaciones por cese de la relación laboral, correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Art. 122. — La percepción de las prestaciones se suspenderá cuando el beneficiario:

- a) No comparezca ante requerimiento de la autoridad de aplicación sin causa que lo justifique;
- b) No dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 121;
- c) Cumpla el servicio militar obligatorio salvo que tenga cargas de familia;
- d) Sea condenado penalmente con pena de privación de la libertad;
- e) Celebre contrato de trabajo de duración determinada por un plazo menor a doce (12) meses.

La suspensión de la prestación no afecta el período de prestación que le restaba percibir al beneficiario, pudiendo reanudarse al finalizar la causa que le dio origen.

Art. 123. — El derecho a la prestación se extinguirá en caso que el beneficiario quede comprendido en los siguientes supuestos:

- a) Haber agotado el plazo de duración de las prestaciones que le hubiere correspondido;
- b) Haber obtenido beneficios previsionales o prestaciones no contributivas;
- c) Haber celebrado contrato de trabajo por un plazo superior a doce (12) meses;
- d) Haber obtenido las prestaciones por desempleo mediante fraude, simulación o reticencia;
- e) Continuar percibiendo las prestaciones cuando correspondiere su suspensión;
- f) Incumplir las obligaciones establecidas en los incisos d) y e) del artículo 121;
- g) No haber declarado la percepción de gratificaciones por cese de la relación laboral correspondientes a los últimos seis (6) meses;
- h) Negarse reiteradamente a aceptar los empleos adecuados ofrecidos por la entidad de aplicación.

Art. 124. — Las acciones u omisiones contrarias a las obligaciones dispuestas en el presente capítulo serán consideradas como infracciones y serán sancionadas conforme determine la reglamentación.

Art. 125. — Las normas de procedimiento a aplicar serán las siguientes:

- a) La resolución de la autoridad de aplicación de reconocimiento, suspensión, reanudación y extinción del derecho a las prestaciones de desempleo deberá fundarse y contra ella podrá interponerse reclamación administrativa o judicial;
- b) 1. Cuando la actuación administrativa sea denegada expresamente podrá interponerse recurso por ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, en el plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha en que sea notificada la denegatoria;
- 2. Si no recae resolución expresa en la reclamación administrativa en el plazo de cuarenta

y cinco (45) días de presentada, el interesado podrá requerir pronto despacho y si transcurrieren otros treinta (30) días sin emitir resolución, se considerará que existe silencio de la administración y quedará expedita la vía judicial;

- c) En todo lo no contemplado expresamente por esta ley, reglará supletoriamente la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Art. 126. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como autoridad de aplicación de esta ley tendrá facultades para aumentar la duración de las prestaciones conforme a las disponibilidades financieras del sistema.

Art. 127. — La reglamentación contemplará la modalidad de pago único de las prestaciones como medida de fomento del empleo, para beneficiarios que se constituyan como trabajadores asociados o miembros de cooperativas de trabajo existentes, a crear u otras formas jurídicas de trabajo asociado, en actividades productivas, en los términos que fije la misma.

TÍTULO V

De los servicios de formación, de empleo y de estadísticas

CAPÍTULO I

Formación profesional para el empleo

Art. 128. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá elaborar programas de formación profesional para el empleo que incluirán acciones de formación, calificación, capacitación, reconversión, perfeccionamiento y especialización de los trabajadores tendientes a apoyar y a facilitar:

- a) Creación de empleo productivo;
- b) Reinserción ocupacional de los trabajadores desocupados;
- c) Reasignación ocupacional derivada de las reformas del sector público y la reconversión productiva;
- d) El primer empleo de los jóvenes y su formación y perfeccionamiento laboral;
- e) Mejora de la productividad y transformación de las actividades informales.

Art. 129. — Serán atribuciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

- a) Integrar la formación profesional para el empleo de la política nacional laboral;
- b) Coordinar la ejecución de programas de formación profesional para el empleo con los organismos del sector público nacional, provincial o municipal y del sector privado, a través de la celebración de convenios;
- c) Validar la certificación de calificaciones adquiridas en contratos de práctica laboral y de trabajo-formación;
- d) Formular los programas de alternancia de formación y práctica laboral en los contratos de trabajo-formación.

CAPÍTULO 2

Servicio de empleo

Art. 130. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social organizará y coordinará la Red de Servicios de Empleo, gestionará los programas y actividades tendientes a la intermediación, fomento y promoción del empleo y llevará el registro de trabajadores desocupados.

Art. 131. — La Red de Servicios de Empleo tendrá como función la coordinación de la gestión operativa de los servicios de empleo a fin de garantizar la ejecución en todo el territorio nacional de las políticas del sector.

Art. 132. — Las provincias podrán integrarse a la Red de Servicios de Empleo por medio de convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por los cuales se tenderá a facilitar la descentralización a nivel municipal de la gestión de dichos servicios.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la integración a la Red de Servicios de Empleo de las organizaciones empresariales, sindicales y otras sin fines de lucro.

CAPÍTULO 3

Estadísticas laborales

Art. 133. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social diseñará y ejecutará programas de estadísticas e información laboral, los que deberán coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Censos e integrarse al Sistema Estadístico Nacional, según la ley 17.622. A tales fines:

- a) Elaborará encuestas e investigaciones sobre relaciones laborales;
- b) Organizará un banco de datos;
- c) Intervendrá en la definición de contenidos y el diseño de los censos y encuestas que realicen los organismos oficiales en lo referente al empleo, la formación profesional, los ingresos y la productividad.

Art. 134. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suministrará al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, la información necesaria para cumplir lo dispuesto por el artículo 135 de esta ley, y coordinará con el Instituto Nacional de Estadística y Censos el seguimiento de los precios y la valorización mensual de la canasta básica.

TÍTULO VI

Del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 135. — Créase el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con las siguientes funciones:

- a) Determinar periódicamente el salario mínimo, vital y móvil;

- b) Determinar periódicamente los montos mínimos y máximos y el porcentaje previsto en el artículo 118 correspondiente a los primeros cuatro meses de la prestación por desempleo;
- c) Aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil;
- d) Constituir, en su caso, las comisiones técnicas tripartitas sectoriales referidas en el artículo 97, inciso a);
- e) Fijar las pautas de delimitación de actividades informales de conformidad con el artículo 90 de esta ley;
- f) Formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de empleo y formación profesional;
- g) Proponer medidas para incrementar la producción y la productividad.

Art. 136. — El consejo estará integrado por dieciséis (16) representantes de los empleadores y dieciséis (16) de los trabajadores, que serán ad honorem y designados por el Poder Ejecutivo y por un presidente designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durarán cuatro (4) años en sus funciones.

La representación de los empleadores estará integrada por dos (2) del Estado nacional en su rol de empleador, dos (2) de las provincias que adhieran al régimen del presente título, en igual carácter, y doce (12) de los empleadores del sector privado de las distintas ramas de actividad propuestos por sus organizaciones más representativas.

La representación de los trabajadores estará integrada de modo tal que incluya a los trabajadores del sector privado y del sector público de las distintas ramas de actividad, a propuesta de la central de trabajadores con personería gremial.

Art. 137. — Las decisiones del consejo serán tomadas por mayoría de dos tercios. En caso de no lograrse ésta al término de dos (2) sesiones, su presidente laudará respecto de los puntos en controversia.

Art. 138. — A petición de cualquiera de los sectores representados en el consejo, se podrá modificar el monto del salario mínimo, vital y móvil establecido.

TÍTULO VII

El salario mínimo, vital y móvil

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 139. — El salario mínimo, vital y móvil garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y previsto por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) será determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos.

Art. 140. — Todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), de la administración pública nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado nacional actúe como empleador, tendrán derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil que se establezca de conformidad a lo preceptuado en esta ley.

Art. 141. — El salario mínimo vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional.

Art. 142. — El salario mínimo, vital y móvil tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria a partir del primer día del mes siguiente de la publicación. Excepcionalmente, se podrá disponer que la modificación entre en vigencia y surta efecto a partir del día siguiente de su publicación.

En todos los casos, dentro de los tres (3) días de haberse tomado la decisión deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial o en otros órganos periodísticos que garanticen una satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad de su texto.

TÍTULO VIII

Del financiamiento

CAPÍTULO I

Art. 143. — Créase el Fondo Nacional del Empleo, con el objeto de proveer al financiamiento de los institutos, programas, acciones, sistemas y servicios contemplados en la presente ley.

Art. 144. — El Fondo Nacional del Empleo se constituirá con recursos de dos tipos distintos:

- a) Aportes y contribuciones establecidos en el artículo 145, inciso a), a fin de que el fondo financie el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo;
- b) Los recursos previstos en los incisos b) y c) del artículo siguiente, a fin que el fondo financie programas y proyectos tendientes a la generación de empleo productivo y los servicios administrativos, de formación y de empleo encomendados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 145. — Los recursos destinados al Fondo Nacional del Empleo son los siguientes:

a) Aportes y contribuciones:

1. Uno y medio (1,5) punto porcentual de la contribución a las cajas de subsidios y asignaciones familiares según lo establecido en el artículo 146 de la presente ley.
2. Una contribución del tres por ciento (3 %) del total de las remuneraciones pagadas por las empresas de servicios eventuales, a cargo de dichas empresas.

3. Una contribución del medio por ciento (0,5 %) de las remuneraciones sujetas a contribuciones previsionales, a cargo del empleador privado.

4. Un aporte del medio por ciento (0,5 %) de las remuneraciones sujetas a aportes previsionales, a cargo del trabajador.

Los empleadores y trabajadores amparados por el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción, quedarán eximidos de las contribuciones y aportes previstos en los incisos 3 y 4 del presente artículo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 112, 2º párrafo de esta ley;

b) Aportes del Estado:

1. Las partidas que asigne anualmente la Ley de Presupuesto.
2. Los recursos que aporten las provincias y, en su caso, los municipios, en virtud de los convenios celebrados para la instrumentación de la presente ley;

c) Otros recursos:

1. Donaciones, legados, subsidios y subvenciones y todo ingreso compatible con la naturaleza y fines del fondo.
2. Las rentas provenientes de la inversión de las sumas ingresadas al fondo por cualquier concepto.
3. Las actualizaciones, intereses, cargos o multas originados en infracciones a las normas de la presente ley.
4. Los saldos no utilizados de ejercicios anteriores.
5. Los recursos provenientes de la cooperación internacional en la medida que fueren destinados a programas, acciones y actividades generadoras de empleo y de formación profesional, previstas en la presente ley.

Art. 146. — Sustitúyese el artículo 23 de la ley 18.017, modificado por la ley 23.568, por el siguiente:

Artículo 23: Fijase como aporte obligatorio de los empleadores comprendidos en el ámbito de la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio, la Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria y la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Estiba, Fluviales y de la Industria Naval, el nueve por ciento (9 %) sobre el total de las remuneraciones incluido el sueldo anual complementario. De ese nueve por ciento (9 %); uno y medio puntos (1,50) porcentuales serán destinados al Fondo Nacional del Empleo, y los siete y medio puntos (7,50) porcentuales restantes a la correspondiente caja de asignaciones familiares.

Art. 147. — La recaudación de los aportes y contribuciones prevista en el artículo 145, será efectivizada

a través de las cajas de subsidios y asignaciones familiares, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, las que tendrán las mismas facultades con respecto al cobro de los aportes y contribuciones del Fondo Nacional del Empleo que las que confieren las leyes 18.017, 22.161 y concordantes.

Art. 148. — Las cajas de subsidios familiares transferirán a la cuenta del Fondo Nacional del Empleo en el plazo de cinco (5) días de su recaudación las sumas percibidas conforme lo dispuesto por los artículos 145 y 146.

Art. 149. — El Fondo Nacional del Empleo creado por la presente ley se constituirá como cuenta especial presupuestaria en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las sumas recaudadas para el Fondo Nacional del Empleo no podrán destinarse a otro fin que el expresamente dispuesto en esta ley.

CAPÍTULO 2

Administración y gestión del Fondo Nacional del Empleo

Art. 150. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo la administración y gestión del Fondo Nacional del Empleo.

El pago de las prestaciones, la recaudación de aportes y contribuciones y su control estarán a cargo de las cajas de asignaciones y subsidios familiares, conforme lo determine la reglamentación, que deberá dictarse en el plazo de sesenta (60) días.

TÍTULO IX

Organismo de contralor

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 151. — Créase una comisión bicameral integrada por tres (3) senadores y tres (3) diputados la que tendrá por función supervisar el cumplimiento de la presente ley, quedando facultada para requerir todo tipo de información de los organismos gestores y de la autoridad de aplicación de la misma.

La comisión estará integrada por el presidente y vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la misma Cámara, y los presidentes de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

TÍTULO X

Prestación transitoria por desempleo

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 152. — Institúyese una prestación por desempleo con carácter transitorio hasta tanto comience a efectivizarse el beneficio establecido en el título IV de esta ley. Los requisitos, plazos, montos y demás condiciones serán establecidos por la reglamentación que se dictará e implementará dentro de los sesenta (60) días de sancionada la presente.

El pago de esta prestación deberá comenzar a realizarse en un plazo no mayor de noventa (90) días de sancionada la presente ley.

Dicha prestación se financiará con los recursos establecidos en los artículos 144 y 145 de esta ley y será gestionada con intervención de las cajas de subsidios y asignaciones familiares.

TÍTULO XI

Indemnización por despido injustificado

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 153. — Sustitúyese el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o 1976) por el siguiente:

Artículo 245: Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante el último año y durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuere menor.

Dicha base no podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

Para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicio o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) meses del sueldo calculados en base al sistema del primer párrafo.

Art. 154. — Derógase el artículo 48 de la ley 23.697 de emergencia económica, y el artículo 19 de la ley 23.769.

Art. 155. — Sustitúyese el inciso a) del artículo 76 de la ley 22.248 por el siguiente:

Artículo 76: inciso a): Un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el plazo de prestación de servicios si éste fuera menor. Dicha base no podrá exceder de tres (3) veces el importe men-

sual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y vigentes a la fecha del despido. Dicha comisión deberá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales. El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) meses de sueldo, calculados en base al sistema del primer párrafo.

TÍTULO XII

Disposiciones transitorias

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 156. — Los aportes y contribuciones establecidas por el título VIII de la presente ley serán exigibles a partir de los sueldos devengados desde el primer día del mes siguiente al de vigencia de la presente ley.

Art. 157. — El Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo comenzará a efectivizar las prestaciones enunciadas en el título IV, capítulo I a los ciento ochenta (180) días de dictada la presente ley. El requisito previsto en el inciso c) del artículo 113 podrá ser acreditado conforme lo establezca la reglamentación.

Art. 158. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para gestionar con los gobiernos provinciales la firma de los convenios y acuerdos necesarios para la ejecución de esta ley.

Art. 159. — Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 160. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.

*Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.*

Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración en general.

Sr. Britos. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente, señores senadores: nadie desconoce la posición que hemos venido sustentando con relación al proyecto del Ejecutivo, denominado "Ley de Empleo".

Todos saben perfectamente que considerar un tema como el que nos ocupa nos ha causado serios inconvenientes que yo podría justificar, ya que mi vida ha estado signada permanentemente por la defensa de los derechos de los trabajadores.

Si bien es cierto que a través de este proyecto el Poder Ejecutivo ha pretendido terminar con el alto índice de desocupación, también lo es el hecho de que hemos tocado leyes tan importantes como las que llevan los números 20.744 y 14.250. Se han dejado de lado derechos adquiridos por los compañeros de la clase pasiva; de

alguna forma, el Ejecutivo ha buscado que los empresarios creyeran en este país y volvieran a invertir. Creo que en principio esta Cámara modificó el proyecto del Poder Ejecutivo y le imprimió un valor que algunos empresarios no supieron reconocer al hablar de la posición sustentada respecto de la flexibilización laboral, siempre teniendo en cuenta que el empresario realmente hiciera una inversión.

Este tema fue debatido en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes finalmente lo aprobaron, pero agregando puntos que también creemos importantes. Si bien es cierto que hemos discutido sobre la cuestión teniendo en cuenta la situación del país, los vamos a aprobar apelando en principio a los señores empresarios para que este enorme esfuerzo que hacen los trabajadores, que realiza nuestro gobierno, sea comprendido.

Por nuestra parte, nos sentiríamos orgullosos si los señores empresarios normalizaran la situación de los 2 millones 700 mil compañeros que están trabajando en negro. Esta situación se crea después de que el gobierno militar, mediante un decreto ley, dejara de lado el aporte correspondiente a seguridad social por parte de los empresarios, aporte que en ese momento era del 15 por ciento.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado, senador Juan R. Aguirre Lanari.

Sr. Britos. — Posteriormente, durante la gestión del gobierno radical, se volvió a un aporte del 7,5 por ciento, y luego de una resolución se llegó al 10 por ciento.

Pero cuando se soluciona esta cuestión, los señores empresarios, en lugar de tener un gesto con el Estado y los trabajadores, lo primero que hacen es empezar a contratar personal en negro.

Nosotros recibimos en 1989 el gobierno con casi dos millones de trabajadores en negro. Ahora tenemos dos millones setecientos mil. Este proyecto busca un sinceramiento por parte del capital y de los trabajadores. En este momento el Estado está haciendo un enorme esfuerzo. Un gobierno que surge de un partido popular como es el peronista o justicialista, consagrado permanentemente a defender los derechos de los trabajadores, debe tocar esos intereses, porque tal vez nuestro presidente ha pensado lo que pensaba Perón: que en todos los tiempos está primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres.

Comprendiendo esta situación, pido a los señores empresarios que también la entiendan,

que no traten únicamente de servirse de esta ley, porque si lo hacen se servirán del país, de este país que todos queremos.

Les dije a algunos amigos radicales que tal vez ellos condujeron bien la parte institucional, la parte política, pero se olvidaron de mencionar el saldo negativo que había quedado de la gestión del Proceso. La gente suele creer en lo que ve, y muchas veces pensó que durante el proceso militar se vivía bien. La realidad nos ha demostrado otra cosa: mientras el país vivía bien se engendró una deuda de casi 48 mil millones de dólares, que heredó el gobierno radical. Y hoy todos los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo para solucionar este problema. Por eso quiero que se comprenda el esfuerzo que ha tenido que hacer nuestro gobierno para que se sancione este proyecto, un esfuerzo que ha sido muy grande en mi caso; esto tiene que ser entendido por mis colegas, compañeros y correligionarios y por todos los hombres políticos que a diario tenemos que dar la cara en la calle.

Dios quiera que todo este esfuerzo sea correctamente comprendido para bien de la Nación.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: entro en este debate en forma pausada y tranquila. Estamos frente a un problema de conciencia y de realidades. Ya hemos tratado en profundidad este tema.

Dice el artículo 71 de la Constitución Nacional en la parte específicamente vinculada a la cuestión que quiero considerar: "Pero si sólo fuese adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones o correcciones fuesen desechadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, pasará el proyecto a la otra Cámara, y no se entenderá que ésta repueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes". Esto significa que como Cámara de origen debemos tratar únicamente las correcciones y adiciones que ha hecho la Cámara de Diputados de la Nación a lo que sancionó el Senado en su oportunidad.

Ahora bien, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué corrigió o adicionó la Cámara de Diputados al texto sancionado en el Senado de la Nación? Considerando modificaciones, supre-

siones y adiciones, se alcanza un número de setenta y nueve, que desglosamos así: se suprimen tres artículos, se concretan nueve artículos nuevos y el resto, 67 artículos, sufren simplemente modificaciones.

Todo esto se encuentra informado por escrito por el señor presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Borda, en una pequeña exposición de 33 renglones, tamaño de una galera del Orden del Día 1.670 de la Cámara de Diputados.

¿En qué consiste la exposición por escrito del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación para fundamentar nada más ni nada menos que supresiones de artículos, adiciones de otros y modificaciones, que como dije suman 79? Expresa que el dictamen tiene tres líneas fundamentales en su estructura. Primera, que el proyecto establece un ingenioso sistema de premios y castigos destinado a alentar el blanqueo de las relaciones laborales surgidas en la clandestinidad. Segunda, nuevas formas de contratación que se dejan libradas a la negociación colectiva y habla de las bondades para producir empleo por tener importantes beneficios para los señores empleadores; y tercera, destaca la creación de un sistema para proteger el desempleo.

Conclusión: no se habla de la inserción de nuevos artículos ni de las modificaciones a la ley de Contrato de Trabajo y a la de Emergencia Económica con relación a los topes indemnizatorios. Lo que se expresa resulta incompleto y no se hace referencia a las reformas introducidas por la Cámara de Diputados.

Del debate realizado en la Cámara de Diputados de la Nación no se saca en limpio absolutamente nada de lo que pueden ser las bondades, beneficios o criterios de tipo jurídico, político o social que dicha Cámara ha tenido en cuenta para modificar tan sustancialmente tanta cantidad de artículos del dictamen aprobado por la mayoría en el Honorable Senado de la Nación.

Pero antes de continuar con mi exposición debo hacer una consideración. Cuando se trató el proyecto del Poder Ejecutivo inicialmente en esta Cámara, nuestra bancada produjo en comisión un dictamen en minoría. Para ello tomó como base un proyecto del señor senador Solari Yrigoyen de Ley Nacional de Protección por Desempleo y Fomento del Empleo Productivo, y las propuestas presentadas por el señor senador Losada. Las circunstancias apuntadas determinan que nuestra bancada votara por el rechazo en general y en particular del dictamen que aprobó el Senado de la Nación.

Es decir, que esta bancada no dio el voto positivo a lo que aprobó el Senado de la Nación en esa oportunidad, particularmente basándose en el dictamen distinto que había elaborado. Por eso, en este acto en el que se trata de aceptar o rechazar las correcciones y adiciones efectuadas por la Cámara de Diputados a dicho texto —que como he dicho no compartimos en general ni en particular en su momento—, ratificamos lo expuesto en aquella oportunidad al tratarse el proyecto del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo ratificamos todas las objeciones manifestadas en aquella ocasión al plantear nuestro rechazo a dicha iniciativa.

De acuerdo con lo manifestado por el señor presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, existen varios aspectos. En primer lugar, uno de los ejes es la problemática del planteo de las relaciones laborales surgidas en la clandestinidad; éste es el léxico empleado por el señor presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara baja.

Este trabajo en negro puede ser trabajo de personal no inscrito simplemente por un olvido, omisión o violación de las normas legales vigentes; puede ser trabajo de personal con salario inferior al legal o convencional y no inscrito por esas circunstancias. Y aquí prácticamente tampoco encontramos blanqueo, porque son situaciones que se enganchan, es decir, la necesidad del trabajo con la capacidad de evasión del empleador.

Por otro lado, tenemos el trabajo de personas que tienen una jubilación precaria y que trabajan por necesidad. En efecto, hay muchos jubilados que se encuentran en la necesidad de prestar servicios porque sus magras jubilaciones no les permiten subsistir. Entonces, como la ley de jubilaciones les prohíbe tener una relación de dependencia, tienen que prestar servicios por sumas inferiores a las que cobraría un trabajador con dependencia blanqueado.

Dicha situación también subsiste y seguirá subsistiendo por una razón de necesidad derivada de los montos de las jubilaciones.

Además, existe el trabajo no estructurado o informal, donde patrón y empleado se ocultan de la ley y se ayudan mutuamente. Dicho tipo de trabajo motiva en estos momentos serios estudios de parte de la Organización Internacional del Trabajo. Esto tampoco se va a blanquear con ninguna disposición legal vigente.

Por último, señor presidente, existen situaciones laborales en grandes empresas en las cuales se observa una franja gris.

Hay contrataciones de profesionales, de técnicos, de empleados de cierta categoría y con conocimientos especiales que aparecen en una zona gris, dado que aparentemente no serían trabajadores dependientes pero podrían convertirse en eso, en una discusión de tipo judicial.

A este gran conjunto de personas, que tienen sueldos importantes, los vemos en los periódicos, canales de televisión y grandes empresas. Ellos, repito, son potenciales actores de demandas judiciales. Aquí y sólo aquí está el problema del blanqueo porque esto hay que unirlo a los beneficios que va a obtener el empleador cuando blanquee y a la disminución de los montos de indemnización por despido incausado.

En este sentido, todos sabemos cuál es la situación actual para el trabajador común, de baja categoría, con sueldos semicongelados y con una proyección de aumento en el futuro sobre la base de la productividad en medio de un proceso de recesión. Debemos recordar las dificultades existentes en las negociaciones colectivas que se ha intentado realizar sobre la base de esos parámetros, ya que no han podido encontrar la forma para medir la productividad.

Entonces, el problema está allí, en esa franja a la que me acabo de referir.

¿Qué es lo que trae como consecuencia esta problemática del blanqueo, señor presidente? Trae nada más y nada menos que un jubileo para los señores empresarios o empleadores que van a denunciar pacíficamente la relación de dependencia de un trabajador. Aquí se reconocen los años de servicio a los efectos jubilatorios y es el sistema previsional argentino —que se encuentra en quiebra o muerto, como dijo el secretario de Seguridad Social— el que tiene que hacerse cargo de los aportes correspondientes. Es decir que nos encontramos con un subsidio al que contribuye cada uno de los argentinos a través de sus impuestos —directos o indirectos—, financiando la desidia de un empleador al no haber inscrito a un trabajador en tiempo y forma.

Pero también debemos decir que una cosa hubiese sido que nosotros consagráramos, por ejemplo, una moratoria de veinte años y que dentro de este término, por un decreto, el Poder Ejecutivo determinara los plazos respectivos, y otra es lo que ocurre aquí. Porque en este país han habido años y años con distintas moratorias, incluso durante este gobierno, a efectos de que los empleadores se encuadraran dentro del sistema previsional, y nos encontramos en este mo-

mento con una distinción privilegiada para un sector determinado.

Pero hay algo importante, señor presidente. Se trata de la gran cantidad de empleados con altas remuneraciones que no se encuentran registrados —personal de dirección de empresas asesoras, técnicos, etcétera—, que trabajan bajo la forma de contratos de locación de servicios o de obra, pero que guardan una relación de dependencia en forma permanente y continuada en sus tareas. En consecuencia, de acuerdo con el derecho laboral son trabajadores dependientes cuya situación en este momento va a ser blanqueada gratuitamente ante las cajas de jubilación. Se trata de personal que a veces percibe desde quince millones de australes hasta tres mil o cuatro mil dólares mensuales, a lo que se le suman comisiones suculentas, cuya situación —reitero— será blanqueada en el sistema previsional. Se les reconocerá no sólo los años de servicios prestados sino que incluso es posible que se les “regalen” años de servicios.

Pero al mismo tiempo ese empleador, por la disminución de los topes de indemnización, va a estar en condiciones —si lo cree conveniente— de poder limpiar las famosas áreas de personal de dirección.

Esto podemos enlazarlo con lo que dijo un economista argentino, el señor Alemann, a quien no quiero complicar en este problema porque es totalmente ajeno a él. Manifestó hace tiempo, cuando empezó la reforma del Estado, que además era necesaria la reforma empresarial, lo que significaba lisa y llanamente mantener exclusivamente al personal de dirección y ejecutivo-técnico necesarios, ya que había una superabundancia de agentes con altas remuneraciones en las empresas del Estado.

Entonces nos encontramos, aun cuando pueda decirse que esto es una suspicacia, con que un único sector será beneficiado. No se va a beneficiar a la pequeña y mediana empresa porque los trabajadores que se hallan “en negro” son los jubilados de Ferrocarriles o de Obras Públicas que eran torneros, los de alguna fábrica que en este momento perciben su jubilación y efectúan algún trabajo en la pequeña o mediana empresa, cuando así lo necesitan, o algunas personas que están en situación de jubilarse.

Existe una pequeña porción de individuos que en este momento están marginados de cualquier tipo de registro.

Aquí también hay que decir una cosa. ¿Qué es lo que queremos blanquear? ¿Queremos blanquear situaciones honradas planteadas en el con-

trato de trabajo o queremos desregular el compromiso previsional de evasores consuetudinarios, que con dinero en el bolsillo y en empresas en marcha tienen un conjunto determinado de empleados con ciertas categorías, a los que no han querido tener como trabajadores dependientes y quienes indudablemente, por la jurisprudencia de nuestros tribunales y por la concepción doctrinaria del derecho laboral, serían declarados trabajadores dependientes en un juicio?

Por lo tanto, esto que se ha hecho en el derecho previsional no favorece la agilización ni el mecanismo de promoción del juicio.

¡Ojalá puedan blanquearse los 2.700.000 trabajadores en negro, muchos de los cuales no son simplemente changarines ni trabajadores no calificados! De acuerdo a como está planteado el tema, no se dará esa situación.

Por otra parte, señor presidente, aquí tenemos otro aspecto importante que no existía cuando se discutió el tema en la otra ocasión. Estamos viviendo muy rápidamente en nuestro país y las transformaciones que se están produciendo, ya sean para bien o para mal, ofrecen contradicciones.

En ese sentido, cuando se discutió anteriormente este proyecto de ley de empleo no había ninguna modificación de la ley de negociaciones colectivas. Entonces, el sector de la mayoría, a pesar de que nosotros no lo acompañamos en razón de la posición que habíamos adoptado al considerar que aquí no debíamos tocar ninguna norma de trabajo, considero que la negociación colectiva podía ser la vía para que pudieran insertarse en aquellas actividades donde las partes estuvieran de acuerdo las nuevas figuras del contrato de trabajo.

Finalmente, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados. Allí, el señor presidente de la Comisión de Trabajo elogió la mecánica de la negociación colectiva.

Pero se dicta el decreto 2.284, denominado técnicamente de desregulación económica, de fecha 31 de octubre de 1991, que me voy a permitir leer.

El capítulo VII, titulado “Negociación Colectiva”, dice en su artículo 104: “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constituirá la comisión negociadora de los convenios colectivos de trabajo de conformidad con los niveles establecidos en el artículo 1º del decreto 200/88, dentro de los plazos dispuestos en la ley 23.546”.

A continuación el artículo 105 establece: “Modifíquese el artículo 1º del decreto 200/88, que

quedará redactado de la siguiente manera: 'Artículo 1° — Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, en ejercicio de su autonomía colectiva, podrán elegir el nivel de negociación que consideren conveniente, de acuerdo con la siguiente tipología: a) Convenio colectivo de actividad; b) Convenio colectivo de uno o varios sectores o ramas de actividad; c) Convenio colectivo de oficio o profesión; d) Convenio colectivo de empresa; e) Convenio colectivo de empresa del Estado, sociedad del Estado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, entidad financiera estatal o mixta comprendida en la Ley de Entidades Financieras, enumeradas en el artículo 1° de la ley 14.250 (texto ordenado por decreto 108/88). Esta enumeración no tiene carácter taxativo. Las partes no están obligadas a mantener el ámbito de aplicación del convenio colectivo anterior, pudiendo modificar el nivel de negociación al momento de su renovación, a petición individual de cualquiera de ellas'."

¿Qué significa esto, señor presidente? Estamos frente a un decreto de necesidad y urgencia que en este momento tiene tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero desgraciadamente, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que no acepto jurídicamente, ha convalidado su constitucionalidad en plena época de paz y tranquilidad a dichas categorías de decretos.

¿Qué pasa con esto? Tenemos que enganchar esta disposición con el decreto 1.334, que no voy a leer, pero que lisa y llanamente determina la productividad como pautas para la negociación colectiva de las remuneraciones. Y sin lugar a dudas, antes de entrar a discutir los salarios, en el artículo 1° dice que previo a la negociación de las escalas salariales a establecerse en los convenios colectivos de trabajo, las partes deberán acordar las bases de cálculo y el método que les permitirá medir la productividad en el ámbito de vigencia de la convención, conforme a la tipología del artículo 1° del decreto 200/88.

Señor presidente: los nuevos contratos podrán discutirse en las negociaciones colectivas, y en ellas, si se acepta, serán insertados como nueva modalidad en esa actividad.

De acuerdo a los textos legales que he leído, no tenemos una ley de negociación colectiva articulada. Cuando ella existe, cuando se viene en cascada del convenio marco a los convenios locales, regionales y por empresa, hay una coherencia, que es lo que se aplica en todo el mundo.

De acuerdo con este decreto se podrá discutir de entrada a través de una negociación colectiva

en cualquier empresa del país, sean éstas grandes, medianas o pequeñas. Prueba cabal de ello es que la negociación colectiva de los mercantiles se suspendió casualmente porque la parte patronal tiene que hacer la consulta, a través de sus cámaras, acerca de quiénes quieren negociar por medio de la empresa.

No estamos en contra de las negociaciones colectivas por empresa sino que sostenemos que deben estar dentro de una ley de negociación colectiva articulada, que es una cosa muy distinta. De no ser así, nos encontraremos con que estos contratos surgidos en las negociaciones por empresa serán impuestos por la fuerza, porque se va a imponer el vigor del más fuerte.

Se va a romper el histórico esquema de la balanza de la justicia social porque el sector trabajador, pequeño frente al sector empresario, en un proceso en el que se necesita y se debe asegurar el empleo, no dará mucho lugar a la discusión.

Tengan en cuenta que cuando el Senado incorporó la negociación colectiva a la legislación laboral tenía una explicación racional, que podía ser compartida o no: estaba dentro del esquema de la ley 14.250 y sus sucesivas modificaciones. Pero ahora sale este decreto, que no establece la negociación colectiva articulada, sino que hace alusión a la negociación colectiva por empresa. Incluso puede determinar el cambio del ámbito de aplicación para dicutar esa convención colectiva.

Es decir, señor presidente, estaríamos en una situación peor que si se hubiese aprobado directamente el proyecto del Poder Ejecutivo, que era obligatorio para todos.

Ahora bien, esto tiene que ver con otra circunstancia, que se vincula con la financiación del Fondo Nacional del Empleo.

Este decreto de desregulación económica ha disuelto las cajas de subsidios: CASFEC, CASFPI y la del personal de la estiba.

Si bien se dice que el Ministerio de Trabajo de la Nación seguirá cumpliendo las funciones de esas cajas, también es verdad que las ha disuelto, que ha dispuesto de sus bienes y que sus disponibilidades vayan a un fondo común creado por ese mismo decreto.

Esta circunstancia nos evidencia que de alguna forma hemos caminado sobre algo que ahora no existe y que deberá manejar el Ministerio de Trabajo. Veremos en su oportunidad qué decreto reglamentará el decreto de necesidad y urgencia.

Días pasados estuvo presente en este recinto el señor ministro de Economía con quien algo incursionamos sobre este aspecto.

Sigo sosteniendo, como lo dije en su oportunidad, que tal cual como este proyecto fue aprobado por el Senado, y peor aún, con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, este es un instrumento voluntarista que no conseguirá, desde ningún punto de vista, terminar o disminuir el desempleo.

El señor ministro dijo que el desempleo había disminuido. Se produjo en la Cámara un cambio de opiniones, dando algunos senadores opiniones controvertidas sobre este tema. Es cierto que en alguna área el desempleo ha disminuido. Pero si el empleo creció un poco no fue por efecto de la desregulación del derecho laboral ni por los nuevos contratos de trabajo. Si así sucedió en algún momento ha sido única y exclusivamente porque ha habido un mejoramiento económico en algún sector de la producción.

Pero hay un detalle que necesita una aclaración, para que no nos engañemos: el problema del desempleo es mundial y para nosotros también es caótico, pero tenemos que resolverlo entre todos.

Cuando opinamos que el desempleo no ha sido detenido, desde ningún punto de vista formulamos una expresión gozosa. Porque ya lo dijimos una vez y lo repetimos ahora que vivimos aquí y debido a nuestra mentalidad y a la situación económica lo seguiremos haciendo. No tenemos la oportunidad de vivir un año de puro verano o de puro invierno: vamos a vivir y a morir aquí; tenemos hijos, nietos y amigos y queremos una sociedad mejor. Así que cuando señalamos algo como esto no lo hacemos para gozar; lo señalamos con sufrimiento para corregirlo, desde la posición en que nos ha colocado el pueblo, para ayudar. Lo hacemos a través de la crítica constructiva y aprobando lo que consideramos se debe aprobar.

Hay estadísticas que sirven para discutir y a veces hasta para ganar una discusión, pero no sirve en absoluto para esclarecer la verdad y para convencernos a nosotros mismos cuando estamos sobre la realidad.

En las encuestas de hogares se incluye el trabajo informal como de plena ocupación. Es decir, el sector del trabajo no estructurado se ha incluido como plena ocupación: el que vende tortas, masas, girasol: el tachero —no el que maneja taxis sino el que arregla y suelda las ollas— el zapatero; el mozo de cordel. Esta es la economía informal: la del hombre que hace changas

todos los días y debe resolver los problemas de su familia mediante lo que ha recolectado con sus trabajos. Todo eso está incluido en este momento en las estadísticas del hogar. Lo dicen los técnicos que estudian la desocupación, que inclusive entregan datos verdaderos y concretos recogidos por hombres que trabajan en el Conicet y en el Ministerio de Trabajo de la Nación, relacionados con proyectos de la Organización Internacional del Trabajo. Estos técnicos acercaron esas cifras al propio gobierno.

Hay otro detalle, señor presidente. Hoy me entretenía leyendo un diario movido por las expresiones de un locutor de radio quien me generó la curiosidad de hojearlo. Como dicen los chicos, es cierto que había un montón de avisos pidiendo trabajadores. Pero no nos debemos engañar: el 90 por ciento de esos avisos a que se refería el locutor son publicados en los diarios por empresas de trabajos eventuales, las que convocan a gente con distintas capacidades para armar sus padrones y en el momento oportuno poder ofrecer ese tipo de servicios.

No quiero referirme a lo que dijo Porto, que hay que caminar para conseguir trabajo; tampoco quiero hablar de lo que dijeron Quaracino, el presidente de la República o el señor ministro de Economía. No quiero hablar de lo que dicen los críticos ni quiero referirme a los que antes gritaban mucho y ahora están callados.

Señor presidente: vemos que éste es un largo proceso que viene desde lejos. Nosotros somos las víctimas. No estoy diciendo que éste sea un problema del justicialismo en el gobierno. Hay que entender esto porque si no nos vamos a equivocar. Es decir, también fue un problema del radicalismo cuando estuvimos en el gobierno y va a seguir siéndolo para el gobierno que venga.

Hay otras noticias que también debo mencionar: los remates que se están produciendo de fábricas desactivadas. Por ejemplo, tengo aquí recortes de remates de talleres metalúrgicos, fábrica de matafuegos, envasadora de legumbres y frutas secas, fábrica de cemento Portland, de hornos rotativos, zarandas, filtros, etcétera. Esta es otra parte de la verdad.

Por otro lado, es cierto que en las fábricas de automotores se ha aumentado la producción. Hace unos cuantos meses había una gran crisis en esas fábricas dado que se vendía y se producía muy poco y había personal suspendido y despedido. Tuvimos oportunidad varios senadores de analizar y mensurar en Córdoba este problema.

¿Qué hizo el gobierno? Hizo algo que está bien: una desgravación impositiva importante para la industria automotriz, lo que determinó una rebaja considerable de los impuestos, de manera que las fábricas pudieran tener inmediatamente un precio más o menos congelado, aumentar la venta y la producción y comenzar a tomar al personal que estaba suspendido o despedido.

Sin embargo, esas fábricas ahora están enojadas, porque por vía de este decreto de desregulación del que hablábamos van a desaparecer los cupos de importación. Entonces sostienen que hay que desregular el contrato de trabajo y las obligaciones previsionales, pero se dan el lujo de estar enojadas porque quitan los cupos de importación. Esas fábricas quieren mantener esa regulación, de manera que puedan vender los autos que quieran y al precio que se les dé la gana.

También es cierto que por ejemplo el peaje ha traído como consecuencia más trabajo para gente de la construcción que está aplicada al mantenimiento de obras. También hay algún aumento de trabajo en la construcción a causa de nuevas viviendas que van a salir por vía de un plan del FONAVI relacionado con un convenio hecho con la Confederación General del Trabajo.

En fin, son pasos importantes que se están dando; lo reconocemos. Pero se están dando sin que este proyecto de ley que estamos tratando tenga algo que ver. Se trata de metodologías que provocan o incentivan aumentos de producción, y no con lo que significa pagar un salario bajo.

En el mundo moderno, la competitividad en la economía de mercado se basa, señor presidente, en dos presupuestos fundamentales, uno de los cuales es la calidad. Para tener calidad se necesita contar con un trabajador de alta capacidad y tener un trabajador de alta capacidad implica un salario elevado. El mundo moderno no puede afrontar la competitividad sin contar con un salario elevado para premiar y jerarquizar la mano de obra calificada. Y aquí se hace todo lo contrario.

Por eso, señor presidente, consideramos que mientras no se promueva un programa de desarrollo no vamos a crear más empleo. Podemos ver cómo en diversas situaciones de alguna forma el Estado ha provocado en sectores muy limitados una incentivación de la producción y ha comenzado a haber más empleo.

En un sector tan castigado, con extraordinario margen de desempleo como el de la construcción, hay atisbos de crecimiento de la mano de obra, por un plan FONAVI que en buena hora

fue resucitado —así queríamos que ocurriera— porque hay crecimiento en la iniciativa privada de la construcción.

Pero también quiero dejar aclarada una cuestión, señor presidente, porque días pasados quedó algo en el aire. No hay obra pública. Se dijo que tiene que ser la actividad privada la que debe incentivar la industria de la construcción. Nadie discute eso. Estamos totalmente de acuerdo. Entiendo que las grandes obras públicas hay que hacerlas, cuando Dios nos ayude y podamos, pero hay que hacerlas, ya que son las que absorben gran parte de la mano de obra.

Por eso, señor presidente, frente a lo que dijimos cuando se trató el proyecto en general y en particular, sobre la base del dictamen de comisión en minoría y teniendo en cuenta el proyecto del señor senador Solari Yrigoyen con relación a la protección del desempleo, consideramos que lo único que trae de novedoso este proyecto es la reforma de las indemnizaciones por despido injustificado. Sobre este tema, a través de su informante, la Cámara de Diputados guardó un respetuoso silencio, tanto oral como escrito. Aquí, señor presidente, se modifica la ley 23.697, de emergencia económica, en cuyo artículo 48 se había consagrado una disposición vinculada a la indemnización que tendía a proteger a los trabajadores de la maniobra del despido injustificado en los momentos de crisis y frente a la sanción de esa ley.

En los últimos años tuvimos la ley 20.744 —antes de la reforma de 1976— y, luego, la 20.774, con la modificación del texto ordenado de 1976, durante el proceso militar.

Nos hubiera gustado que se cayera en la ley 20.744 y también que funcionara el Consejo Nacional del Salario para que el salario mínimo, vital y móvil siguiera siendo la medida fundamental de los topes en las indemnizaciones, de acuerdo con los cálculos matemáticos que establecía ese texto legal.

Consideramos, señor presidente, que el artículo 153 va a ser de muy difícil aplicación, e incluso que va a traer serios problemas judiciales. En el caso de que la mayoría vote en favor de todas las reformas y adiciones hechas por la otra Cámara —a las cuales nos vamos a oponer—, a los efectos de que haya una legislación coherente vamos a proponer como ya lo había planteado la bancada de la Unión Cívica Radical en el debate en general, la modificación del artículo 78 de la ley 22.248, de trabajo agrario, para que se corresponda con el artículo 153 que el Senado sancionaría.

No queremos profundizar más en estos temas, porque ya fueron agotados en su oportunidad. Por eso, ratificamos el voto que hicimos en la primera oportunidad en que el Senado trató esta cuestión. Nos oponemos en particular a todas las adiciones y modificaciones que ha hecho la Cámara de Diputados de la Nación y proponemos —como dije recién— en caso de ser aprobado el monto indemnizatorio del artículo 153, la reforma de la Ley de Trabajo Agrario, también hecha por la Cámara de Diputados, para que haya coherencia.

Con estas palabras dejo sentada la posición del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: en nombre del señor senador por Corrientes, Romero Feris, quien no ha podido asistir, solicito la inserción del discurso que él pensaba pronunciar con relación al proyecto de ley de empleo.

—Asentimiento.

—El texto de la inserción es el siguiente.

Señor presidente:

Vuelve a esta Cámara para su tratamiento el esperado proyecto de Ley Nacional de Empleo, con las modificaciones que la Cámara de Diputados introdujo, las que si bien no contienen cambios fundamentales al oportunamente aprobado por esta Cámara, soy de opinión que las mismas en general han sido un aporte positivo que mejora la ley en debate, lo que por cierto no impedirá que insista en algunas reformas cuya inclusión estimo convenientes.

Tengo bien claro la importancia de esta herramienta normativa, por las implicancias sociales y económicas que de la misma se desprenden.

Es justamente por ello que mi responsabilidad como legislador no me permite dejar pasar por alto algunas disposiciones que se oponen a mi criterio en la materia.

Sabemos —es de público conocimiento— que el gobierno insiste en la aprobación de este cuerpo normativo, y en la urgencia no duda en culpar a este Congreso por la tardanza en su sanción.

Pero ello no impedirá que manifieste, como ya expresara, mis discrepancias parciales.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, comparto en lo esencial el cuadro descrito en la exposición de motivos sobre la importancia del empleo y el problema social que significa su terrible contracara: el desempleo.

También comparto el enfoque sobre la dignidad del hombre y el enfoque de la Iglesia al abordar el tema, destacando la hoy centenaria *Rerum novarum* del papa León XIII, y la reciente *Centesimus Annus*.

Y sin duda coincido en el objetivo de eliminar el empleo clandestino, el famoso trabajo en negro; con la promoción del empleo, y por último, con la protección de

aquellos que se encuentran inmersos en la terrible contingencia social del desempleo.

Evidentemente la introducción de nuevas figuras del contrato de trabajo producirá importantes cambios y transformaciones en el mercado laboral. Todo esto producirá una mayor demanda de mano de obra por cuanto flexibilizará las condiciones de trabajo.

Pero debe quedar claro que flexibilizar no equivale a desprotección legal ni a pasividad del Estado ante la realidad económico-social, pues resultaría una simplificación errónea.

El Estado tiene un rol a cumplir, evitando el canibalismo selvático pero haciendo dinámico el proceso, alentando el contacto fluido entre los distintos actores de la relación laboral, implementando medidas tendientes a reconvertir, reinsertar y potenciar la producción, alentando la inversión privada y el desarrollo.

Abordando el análisis concreto del articulado lo dividiré en tres partes principales.

Ante todo celebro la eliminación del artículo 7º en la Cámara baja, al cual oportunamente me opuse en este recinto, y sobre cuyos detalles no me extenderé por ser ya una cuestión abstracta.

La eliminación por parte de la Cámara de Diputados del plazo de 6 meses prescrito por el artículo 12 del proyecto en estudio, ha sido una solución errada, por cuanto dicho plazo ponía un límite razonable al monto de la sanción del 25% establecido en los artículos 8º, 9º y 10, pues ahora llega hasta un máximo de dos años —plazo de prescripción—; es decir que la sanción puede llegar a elevarse hasta en un 400%.

Si a lo expuesto sumamos la duplicación en la indemnización que prevé el artículo 15 para el caso de despido de un trabajador dentro de los 2 años desde que éste efectúe la intimación para que el empleador regularice su situación, no cabe duda de que éste esquema en la práctica resulta ser mucho más rígido y severo que el previsto en la actual Ley de Contrato de Trabajo.

Entiendo y comparto la preocupación de resguardar los derechos de los trabajadores; pero debemos procurar que el exceso de protección no produzca en la realidad el efecto contrario.

La segunda parte en la que he dividido el proyecto para su análisis, titulada "De la promoción y defensa del empleo", prevé nuevas formas de contratación por tiempo determinado promocionadas bajo exenciones totales o parciales a los sistemas de previsión y seguridad social.

Coincido, como ya lo expresara en este recinto, con el tipo de relaciones previstas, las que concuerdan globalmente con proyectos de mi autoría, los que fueran tenidos en cuenta por el dictamen en mayoría de esta Cámara, y que se mantuvieron en la sanción de Diputados, salvo en lo que respecta al contrato de trabajo de tiempo determinado para trabajadores provenientes del sector público, el cual fue eliminado.

Más allá de las coincidencias apuntadas, existen algunas diferencias originadas en disposiciones que restringen en alguna medida la implementación práctica de este tipo de contratación, dificultando la flexibilización deseada, por lo que propondré la supresión de los artículos 32 y 36.

Destaco que en el primero de los artículos mencionados la Cámara Baja incluyó a las asociaciones sindicales entre los entes a los que el empleador no debe adeudar suma alguna para poder utilizar este tipo de contratación promocionada.

Es lógico que si oportunamente solicité la supresión de este artículo, con mayor razón volveré a proponer dicha solución, porque si no se agregará un nuevo obstáculo hacia la utilización de los contratos de trabajo promocionados, para beneficio de trabajadores y empleadores.

Entiendo que estos artículos trabarán la contratación promovida, ya que los contenidos tornan de excepción, para la mayoría de las empresas, el uso de los nuevos contratos. El propio peso de los hechos demuestra que un intrincado sistema laboral y previsional argentino nos indica que será muy difícil para las empresas encuadrarse bajo estas circunstancias.

Adviértase que no se trata de liberar al empleador de posibles deudas contraídas con el sistema, pues éste puede ejecutar sus acreencias por los demás medios que se encuentran a su alcance, sino promocionar a las nuevas contrataciones en beneficio de un mercado laboral hoy deprimido.

Con respecto al artículo 67, que regula el contrato de temporada, la Cámara de Diputados lo mantuvo inalterado, razón por la que insistiré en la conveniencia de su reforma, ya que en él se invierte la carga de la notificación para la continuación del contrato de trabajo, cuando bajo el régimen de la ley 20.744 se encuentra a cargo del trabajador.

El problema se circunscribe a una cuestión de lógica, ya que no es poco frecuente que el trabajador mude de domicilio, resultando su localización dificultosa, cuando el empleador seguramente mantendrá el establecimiento en el mismo lugar.

Por ello, propongo que la obligación de notificar la manifestación de voluntad de proseguir con la contratación se encuentre en cabeza del trabajador, suprimiéndose el apercibimiento contenido en el último párrafo del artículo cuestionado.

Para finalizar el tercer aspecto de mi análisis, celebro la supresión del artículo 102 por parte de la Cámara de Diputados, en el que se incluía la presunción legal de que las renunciadas masivas encubrían despidos colectivos, cuya derogación oportunamente impulsé en este recinto.

Señor presidente:

Las reflexiones precedentes en las que he señalado algunas puntuales discrepancias con el único objeto de aportar elementos que pueden perfeccionar el proyecto, no me impiden coincidir globalmente con la filosofía que lo impregna, y que sin duda apunta a que el país cuente con una legislación laboral más flexible y adecuada a la realidad socioeconómica existente.

Entiendo que el país está cansado de palabras y necesita de este Parlamento las leyes, que si bien son perfectibles —como la que hoy debatimos— significan un paso adelante en la dirección a la que no dudaron en avanzar países como Italia y España con resultados satisfactorios, y cuya experiencia ha sido muy tenida en cuenta por los redactores de este proyecto.

Por lo expuesto, y por aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno, apoyaré en general el proyecto, por ser un aporte concreto a la dinamización de las relaciones laborales.

Las gigantescas transformaciones políticas, económicas y sociales que atraviesa el mundo, y los importantes cambios generados por la revolución científica y tecnológica, y sus consecuentes repercusiones socioeconómicas nos exigen actuar con pragmatismo.

El proyecto en debate es un paso adelante por el camino nuevo, y yo me comprometo a dar otros pasos para que contemos con una legislación moderna y adecuada a las nuevas formas que nos exigen las actuales circunstancias.

Desde esta perspectiva y con las disidencias puntualmente señaladas votaré en general por la aprobación del proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Oportunamente se va a someter a votación el pedido formulado.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente, señores senadores: nos hemos reunido para tratar varios proyectos muy importantes, comenzando por el de ley de empleo, que ha sido largamente estudiado por todos los bloques. El país entero le ha prestado atención. Se ha consultado a todos los sectores del trabajo, a sus organizaciones, a sus dirigentes. Han opinado también los sectores empresarios. Hemos auscultado la legislación internacional.

En nombre del bloque del Partido Bloquista quiero decir que el señor senador Britos, en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ha tenido la ocasión de estudiar el tema y ha estado atento a lo que se ha opinado a lo largo y a lo ancho del país sobre este proyecto de ley de empleo.

Personalmente tengo confianza en nuestros empresarios. Si bien hay sectores que piensan que esto puede traer perjuicios para muchas conquistas obtenidas por los trabajadores a través de largos años y de fecunda labor, yo creo que no.

He tenido oportunidad de ver qué ocurre en otros lugares. No quiero entrar en detalles sobre el contenido de este proyecto de ley de empleo, pero debo tener en cuenta lo que sucede en los países llamados de avanzada, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otras naciones de Europa y de distintos continentes.

Sabemos que la Argentina ha entrado en un proceso de reactivación en todas las direcciones. Después de un estudio profundo que hemos llevado a cabo pensamos que el pequeño, mediano y también el gran empresario necesitan con ur-

gencia que aprobemos este proyecto. Sin lugar a dudas, según mi opinión y la de mi partido, esta iniciativa va a traer, además de una reactivación, una gran posibilidad para que muchos argentinos puedan convocar a nuevos trabajadores, y lo que debe ser tenido presente por ellos es que nadie va a quedar desamparado.

El actual gobierno ha dado pruebas cabales de su intención de continuar con esta política que está en el corazón de todos los partidos y en el espíritu de los argentinos, a través de la cual todos queremos defender el trabajo y fundamentalmente a todos los que lo practican.

Ayer hemos analizado en una reunión de presidentes de bloque esta cuestión, como ya lo habíamos hecho anteriormente, y observamos que nuestras opiniones en general eran coincidentes. Sobre la base de ello hemos pactado que el bloque de nuestro partido va a apoyar este proyecto tan útil, necesario y esperado por todos los argentinos.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Luis A. J. Brasesco.

Sr. Bravo. — Naturalmente, una ley de esta trascendencia podrá recibir fundadamente algunos reparos. Pero nuestro partido, a través de los dos senadores por San Juan, cree que apoyando esta iniciativa el día de hoy va a convertirse en una jornada importante para el trabajo y el desarrollo del país.

Concretamente, votaremos por la afirmativa este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: vuelve a esta Cámara este proyecto de ley que oportunamente habíamos considerado en otra sesión. Lo hace con modificaciones cuya magnitud no ha merecido una opinión unánime por parte de los oradores preopinantes, según lo habrán podido observar aquellos que como yo han escuchado con gran interés las valiosas manifestaciones formuladas precedentemente en este recinto.

En verdad, la reflexión que me suscita lo que acabo de escuchar en el debate es que existen objetivos comunes pero no coincidencia en cuanto a las consecuencias que podrán traer las normas que hemos aprobado hace unos meses y que luego fueron tratadas y modificadas en algunos casos por la Cámara de Diputados, modificaciones que habremos de ratificar seguramente en el curso de esta sesión.

Por supuesto, hubo coincidencia de todos tanto en la sanción originaria como también la habrá hoy en lo que se refiere a la necesidad y conveniencia de facilitar todo aquello que evite el pernicioso empleo en negro; pernicioso no solamente desde el punto de vista de los intereses fiscales sino por supuesto desde el de la falta de protección de aquellos trabajadores que aceptan transitar por ese marco a raíz de necesidades que son superiores a los resguardos legales.

Sin duda alguna también hay un propósito común en cuanto a los objetivos que se han buscado; en esto todos coincidimos. Me refiero al hecho de buscar que se abran nuevas oportunidades para que conforme a ellas se incorpore en nuevos puestos de trabajo a una multitud de jóvenes que ésta exigiendo lo que legítimamente esperan del país.

El problema es que cuando entramos a ver cuáles son las soluciones que se proponen ya no hay coincidencias. En efecto, no las hubo en la sanción originaria y evidentemente, por lo que acabamos de escuchar, tampoco las hay por las insinuaciones planteadas en esta Cámara en lo que se refiere a la intención de voto.

Me voy a permitir leer el apoyo crítico que en la sesión originaria brindé al proyecto. Textualmente señalé que el texto era "excesivamente reglamentarista en varios tópicos, cuando lo ideal hubiera sido brindar una suerte de marco jurídico para el desenvolvimiento fluido de las relaciones laborales, creando y regulando los medios de fomento del empleo y eliminando las rigideces que caracterizan nuestra legislación del trabajo".

Creo que las modificaciones que estamos tratando no han mejorado de manera notoria el texto en este aspecto porque muchas modificaciones son meros cambios de redacción y de orden pero no sustanciales.

Voy a ser respetuoso del deseo común de abreviar este debate, por lo que no voy a entrar en el análisis de las muchas modificaciones que se han introducido en la Cámara de Diputados, algunas de las cuales fueron enumeradas por el señor senador por Entre Ríos. Omitiré referirme también a las críticas que hice al proyecto original en oportunidad de su tratamiento el 17 de abril del corriente año.

Entonces, simplemente quiero decir que con relación al título II, que se refiere a la regularización del empleo no registrado, vemos que el proyecto en análisis establece en qué casos se entenderá que la relación ha sido suficiente-

mente registrada en el artículo 7º, y que en el inciso b) del mismo se remite al Sistema Unico de Registro Laboral, tema éste tratado en los artículos 18 a 20 del texto venido de la Cámara de Diputados.

En los citados artículos se hace mención al Instituto Nacional de Previsión Social y a la Caja de Subsidios Familiares, entidades que figuran entre las disueltas por el decreto 2.284/91, de desregulación.

A la luz de ello nosotros debemos formular la siguiente pregunta: ¿cómo se compatibilizan estas normas en el supuesto no meramente hipotético de que este decreto sea ratificado por ley? Entiendo, señor presidente, que las referencias en cuestión deberán ser hechas al Sistema Unico de Seguridad Social.

En el título III, que incluye entre otros temas el de las modalidades de contratación que se han denominado "flexibles", hago notar que la multitud de requisitos y condicionamientos que se requieren para su concreción difícilmente harán operativas las mismas.

Es cierto que existen algunas mejoras, como las del artículo 109, al cual, junto con la habilitación de las modalidades contractuales por el convenio colectivo, se agrega la que pueda establecer la autoridad de aplicación en caso de emergencia ocupacional. Por supuesto esto es materia opinable según hemos escuchado en el curso de este debate, ya que era mejor la habilitación automática en estas formas contractuales en base a la voluntad de las partes, sin necesidad de que hubieran de ser habilitadas por convenio colectivo. Pero haciendo esta salvedad me pronuncio por aceptar el artículo 109 como viene de la Cámara de Diputados.

Hay algunos aspectos que en mi concepto son desfavorables; por ejemplo, la supresión de la modalidad del contrato de trabajo por tiempo indeterminado para los trabajadores del sector público, habida cuenta de que atento al plan de ajuste en marcha, que ha generado gran desocupación, la modalidad debía ser contemplada. Por eso creo que eran mejores los artículos 48, 49 y 50 que aprobó el Senado.

Creo también que es inconveniente la diversificación de los plazos contractuales que se establece en los artículos 44, 48, 52 y 59 del texto venido de la Cámara de Diputados y que era mejor el artículo 39 del Senado que fijaba con acierto un plazo común para todas esas formas contractuales que era de entre seis meses y un máximo de veinticuatro meses.

Respecto del título IV referido a la protección de los trabajadores desempleados, señalo mi discrepancia con el artículo 112 del texto modificado por Diputados, que excluye a los trabajadores agrarios de la protección estatuida.

Creo que hay una incongruencia en que se excluya al trabajador agrario del sistema de protección por desempleo y que en cambio se modifique el régimen de indemnización por despido, como lo hace el artículo 155 del texto que analizamos.

En mi opinión también resulta desacertado el artículo 18 venido de la Cámara de Diputados, referido a la cuantía de la prestación por desempleo, en cuanto establece un sistema de cálculo engorroso y carente de justificación alguna. Si estamos ante una situación coyuntural de desempleo y a una prestación que tiene carácter de subsidio, no se advierte el fundamento por el cual se hace una discriminación en el tiempo para el cálculo de la prestación.

Por eso me pareció mejor el texto sancionado por el Senado estableciendo una prestación uniforme consistente en el 60 por ciento de los haberes.

En cambio, considero correctas las modificaciones consignadas en los artículos 113 y 114 del texto venido de Diputados y que plasman las críticas que hiciera en la sesión del 17 de abril a los artículos 105 y 102 del texto oportunamente aprobado en este recinto.

En este sentido, recuerdo que refiriéndome al artículo 102 del proyecto sancionado por el Senado —actual artículo 114—, manifesté mi desacuerdo con el texto que establecía que en el caso de producirse renunciaciones masivas se presumiría que las mismas quedarían encuadradas como despido voluntario por parte del empleador. Consideraba acertada la previsión porque no resulta claro en qué supuestos podemos considerar la existencia de renunciaciones masivas, y además una presunción desmedida podía prestarse a eventuales maniobras fraudulentas.

En conclusión, considero acertada la supresión de este párrafo por parte de la Cámara de Diputados.

También expresé mis dudas con respecto al artículo 105 del proyecto, porque en el inciso e) se excluía de los posibles beneficiarios a quienes reunieran los requisitos para gozar de los beneficios previsionales, pensiones, retiros o jubilaciones por invalidez. Como lo señalé, una cosa es contar con esos requisitos y otra distinta es gozar de los beneficios atento a lo que entonces destacó —hecho por todos conocido— res-

pecto de las dificultades de mantener un beneficio previsional.

Considero adecuada la modificación introducida por la Cámara de Diputados porque ahora sí se excluye de la prestación a quienes gocen de beneficios previsionales y no solamente a quienes estén en condiciones de percibirlos.

Finalmente me referiré al artículo 153 del proyecto que sustituye al 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta disposición trata el tema de la indemnización por antigüedad en los casos de despido sin causa y se refiere a la ley 23.697, que eliminaba los topes de las indemnizaciones. Esto generó polémicas e interpretaciones encontradas, abriendo las puertas a desproporcionados montos indemnizatorios, cuyo costo laboral seguramente era tenido en cuenta por los empleadores, gravitando negativamente en la creación de nuevos puestos de trabajo.

El artículo 153 del proyecto venido en revisión sustituye el artículo 245 citado, y establece un tope indemnizatorio que mejora el texto vigente. De todas maneras, considero que es innecesariamente complejo.

A mi juicio, hubiera sido más justo y sencillo establecer un sistema similar al que tiene el Estado nacional con sus agentes, por el que se fijan diversos porcentuales del haber indemnizatorio en relación directa con la antigüedad en el cargo que tuviese el interesado.

En resumen, señor presidente, creo que los mejores propósitos a veces naufragan cuando la estructura de ellos procura conciliar criterios iniciales aparentemente contradictorios.

No puede discutirse, como lo señalé antes, el propósito del proyecto de ley. Por el contrario, resulta loable por cuanto persigue la apertura de nuevas fuentes de trabajo. Este tema está íntimamente ligado con la desregulación que viene agitando el ambiente, creando polémica y provocando distintas opiniones.

En mayor o menor medida creo que todo el mundo coincide *ab initio* con el tema de la desregulación, por cuanto se la considera un ingrediente necesario para oxigenar y clarificar las reglas que rigen nuestra vida económica y social. Los problemas se originan cuando se trata de determinar sus límites.

Lo mismo sucede con el tema en tratamiento, ya que a mi juicio el hecho de contar con estructuras excesivamente rígidas puede o no permitir en algunos casos la aparición del resquicio necesario para que hombres y mujeres jóvenes puedan cumplir con su justificado deseo de

irrumper con equidad en nuevos puestos de trabajo.

Creo que es conveniente institucionalizar este mercado del trabajo en negro, evitando que prosiga siendo así tan grande como lo evidencian las cifras que se han denunciado acá.

También hay que estimular la creación de nuevas actividades por parte de las empresas para que ellas intenten nuevos rumbos o por lo menos aumenten sus actividades. Pero, repito, temo que el exceso de reglamentación pueda desestimular esta dirección, que sin duda alguna es loable en el ámbito general de nuestra economía.

Sin embargo, creo que debemos ser optimistas. En este sentido quiero compartir no sé si por total convicción pero sí por lo menos en deseo, lo que acaba de manifestar el señor senador por San Juan acerca de que debemos esperar que se abran nuevos rumbos que permitan una expansión de las actividades, y con ellas al mismo tiempo se pueda vislumbrar un horizonte que hoy en día está muy acotado y casi negado a millares de jóvenes argentinos.

Por eso creo que sin ser el ideal, al menos este proyecto es mejor que nada; hay que intentar nuevos rumbos. No obstante las buenas intenciones que puedan haber inducido en su momento a la sanción de determinadas normas, lo que hemos vivido hasta hoy no es precisamente beneficioso.

Señor presidente: en virtud de lo que acabo de exponer y sin perjuicio de las críticas que dejo señaladas, anuncio mi voto favorable al proyecto en consideración.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: quiero simplemente pronunciar las indispensables palabras que fundamentan el voto afirmativo que los señores senadores por el Neuquén vamos a dar a este proyecto de ley.

Comparto el mismo sentimiento que el expresado con claridad por los señores senadores de los partidos provinciales: votamos una esperanza. En oportunidad de considerarse anteriormente este proyecto sostuve que el mismo se basaba más bien en teorías —y expuse la de la flexibilización laboral que recogían autores modernos y se ponía en práctica en distintos países europeos—, ya que con ellas solas no alcanzaba.

Este proyecto de ley deberá ser juzgado a la luz de los hechos que se produzcan en el futuro inmediato en nuestro país, porque si no tiene lugar una reactivación laboral y no surge una

clase empresaria con verdadero sentido de lo que es la nacionalidad y el desarrollo nacional, habrá sido inútil la sanción de estas prolijas leyes, muy importantes y muy bien fundadas, pero que no se ajustaron a la realidad de los hechos.

En consecuencia, con estas reservas que son compartidas por mis ilustres colegas, votaremos favorablemente este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Brasesco). — Si ningún señor senador hace uso de la palabra, doy por cerrado el debate, y como hay quórum vamos a votar de la siguiente manera: frente a las modificaciones de la Cámara de Diputados, quienes voten por la afirmativa lo estarán haciendo en favor de las modificaciones o agregados que ella sancionó.

Sr. Britos. — De acuerdo con el despacho en mayoría.

Sr. Rubeo. — Si me permite, señor presidente, primero hay que votar en general.

Sr. Presidente (Brasesco). — La Presidencia considera que no hay que votar en general, porque dentro del mecanismo de formación y sanción de las leyes, debemos votar únicamente si se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

bloque justicialista, requerimiento que ha omitido el peticionante.

Sr. Rodríguez Saá. — Si bien no era lo conversado, hay una razón de urgencia extrema —diría yo— y de suma justicia, al par que un reconocimiento a esa población que está sufriendo semejante desastre.

Por ello, si los otros bloques están de acuerdo, vamos a apoyar lo solicitado por el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: apoyamos el pedido de tratamiento sobre tablas formulado por el señor senador por Santa Cruz.

Desde hace bastante tiempo recibimos diariamente telegramas angustiosos de los pobladores de la provincia de Santa Cruz que están sufriendo este dañino fenómeno que se ha abatido sobre aquella provincia y otras zonas del país.

Sabemos de la difícil situación por la que está pasando más de la mitad de la población de la provincia de Santa Cruz.

Por eso vamos a apoyar fervientemente la moción formulada por el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Presidente (Brasesco). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador por Santa Cruz.

—La votación resulta afirmativa.